



UNRISD INFORMA

Boletín del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social

Racismo, ciudadanía y justicia social

Yusuf Bangura

Dos cuestiones importantes en materia de política pública han influido en los debates sobre el racismo y la xenofobia. La primera es la complejidad con la que las brechas raciales han determinado la evolución de la ciudadanía, particularmente en los países caracterizados por profundas divisiones étnoraciales. Puede considerarse que gran parte de la historia de los esfuerzos desplegados para crear un entorno público receptivo y responsable han sido luchas encaminadas a eliminar las barreras raciales y a integrar a los grupos anteriormente excluidos en el sistema de los derechos y las obligaciones que definen la ciudadanía.

Las luchas para lograr la ciudadanía universal han subrayado la necesidad de respetar la diversidad cultural y sus valores subyacentes, es decir, la tolerancia, el acogimiento y la solidaridad. La segunda cuestión es la promoción de la justicia social y de sistemas de gobierno equitativos, considerados como condiciones fundamentales para lograr la estabilidad y consolidar los valores de la ciudadanía. Sin embargo, las reformas basadas en la justicia social enfrentan a menudo dificultades, ya que abordan cuestiones redistributivas. Pueden ser consideradas por algunos como un “juego de suma cero”. Las partes perjudicadas ▶ **página 2**

Tras un paréntesis de un año, **UNRISD Informa** está aquí de nuevo—¡y los lectores descubrirán que el Instituto no ha estado precisamente de vacaciones! En esta edición de 44 páginas ofrecemos abundante información sobre nuestro trabajo en los últimos 12 meses, inclusive 23 publicaciones, nueve eventos y un sitio Web totalmente rediseñado.

UNRISD tiene el gusto de ofrecer a los lectores una excelente serie de contribuciones en las que se abordan temas tales como el racismo, la ciudadanía y la justicia social. En la presente edición, ocho especialistas destacados—Hans-Georg Betz, Robert D. Bullard, George M. Fredrickson, Ray Jureidini, Khoo Boo Teik, Glenn C. Loury, Tracey McIntosh y Rodolfo Stavenhagen—reflexionan sobre la construcción social de la raza y la ciudadanía, la dinámica social del racismo y la desigualdad, las respuestas a la diversidad cultural, y el modo en que las políticas públicas influyen en las relaciones raciales.

Contenido . . .

TEMAS BASICOS — La raza y la ciudadanía en los Estados Unidos • La raza, el género y la política pública en Aotearoa/Nueva Zelandia • El trabajo contractual temporal y las prácticas xenófobas en el Medio Oriente • El populismo exclusionista y la ideología diferencialista en Europa Occidental • La moralidad superficial de la ceguera racial en los Estados Unidos • El conflicto étnico posterior a la crisis en Indonesia • La lucha contra el racismo ambiental a escala mundial en el siglo XXI **LECTURA OBLIGADA** **REPORTAJES INTERNOS** — Conflicto, participación y movimientos ambientales • Mejorando el conocimiento sobre el desarrollo social en las organizaciones internacionales • Estructura étnica, desigualdad y gobernabilidad del sector público • Envejecimiento, desarrollo y protección social • UNRISD en el Foro Social Mundial • El Pacto Mundial y la sociedad civil • Cambio agrario, género y derechos agrarios • La necesidad de reconsiderar la economía del desarrollo • La responsabilidad social y ambiental de las empresas en Perú • La tecnología de la información y las comunicaciones en Senegal • Donald McGranahan, 1917–2001 **DESDE OTRAS LATITUDES**
UNA ULTIMA PALABRA — Reflexiones sobre racismo y política pública, por Rodolfo Stavenhagen

asociadas con el *estatus quo* pueden contrariar o socavar las reformas, mientras que las partes beneficiadas pueden no ser suficientemente fuertes para defenderlas. La preocupación por la prudencia fiscal bajo las condiciones de los mercados liberales competitivos también puede ser un obstáculo para cerrar la brecha de las desigualdades.

En la Conferencia sobre Racismo y Política Pública de UNRISD (Durban, del 3 al 5 de septiembre de 2001)—celebrada para que coincidiera con la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia—se abordaron cuatro amplias cuestiones relativas a las mencionadas anteriormente: la construcción social de la raza y la ciudadanía; la dinámica social del racismo y la desigualdad; respuestas organizadas a la diversidad cultural; y el efecto de las políticas públicas en las relaciones raciales.

Más de 40 expertos de renombre internacional procedentes de varias regiones del mundo aceptaron la invitación de UNRISD a redactar informes y dirigir debates en la reunión. La presente edición de **UNRISD Informa** es una recopilación de documentos presentados por ocho de estos expertos: George M. Fredrickson, Tracey McIntosh, Ray Jureidini y Hans-Georg Betz, tratan cuestiones relativas a la ciudadanía; Glenn C. Loury, Khoo Boo Teik y Robert D. Bullard, abordan los temas de la gobernabilidad y la justicia social; y Rudolfo Stavenhagen analiza los cambios en las ideas sobre la raza, la ciudadanía y la justicia desde el establecimiento de las Naciones Unidas.

Cuestiones relativas a la ciudadanía

La investigación genética ha desacreditado la práctica de clasificar a los seres humanos según distintas razas. Sin embargo, sigue observándose una brecha entre los conocimientos científicos y las creencias populares acerca de la raza. Las diferencias físicas pueden parecer triviales, pero estructuran percepciones y constituyen una fuente impor-

tante de prejuicios en las relaciones sociales. **George M. Fredrickson** aborda las tradiciones opuestas de pensamiento con respecto a la evolución de la ciudadanía en los Estados Unidos. En este país, el compromiso con los derechos humanos universales coexistió con una fuerte tendencia histórica a negar el derecho de ciudadanía a grupos que no fueran de raza blanca. La Guerra Civil y la utilización de tropas integradas por personas de raza negra para defender la Unión constituyeron el primer intento de ampliar la ciudadanía a los afroamericanos. Sin embargo, este logro fue menoscabado en el Sur durante la era de Jim Crow, que abarcó prácticamente un siglo, en que se discriminó, privó de sus derechos civiles y atemorizó a la población negra en el Sur. Las luchas por la igualdad racial se intensificaron entre los decenios de 1930 y 1960, y culminaron con las Leyes de los Derechos Civiles de 1964 y 1965, gracias a las cuales se respetaron más los derechos de ciudadanía. Sin embargo, como observa Fredrickson, la igualdad formal en los Estados Unidos no ha conducido a la ciudadanía social. En efecto, es probable que el encarcelamiento, el desempleo, el aislamiento social y la indigencia afecten a un porcentaje más alto de personas de raza negra que de raza blanca.

La discriminación racial afecta de distinta forma a las mujeres que a los hombres, lo que pone de relieve la necesidad de comprender el concepto de ciudadanía desde la perspectiva de la distinción por género en sociedades divididas racialmente. **Tracey McIntosh** desarrolla este tema a la luz de las experiencias de las mujeres maoríes en Nueva Zelanda. La raza, el género y la clase son cuestiones entrelazadas—y es peligroso imaginar una “mujer” universal o grupos étnicos homogéneos. Las mujeres maoríes, por ejemplo, comparan con los hombres maoríes las lacras y desventajas asociadas a la colonización, a saber: una educación y un estado de salud deficientes, bajos niveles de ingresos y de empleo, una vivienda inadecuada y una tasa de criminalidad

excesivamente alta. Sin embargo, las mujeres maoríes se hallan en una situación de desventaja en relación con los hombres maoríes y la población neozelandesa de raza blanca. McIntosh señala que las políticas deben centrarse en fomentar la participación de las mujeres maoríes en las instituciones dominadas por hombres maoríes, así como en las instituciones nacionales que regulan las vidas de todos los neozelandeses.

Ray Jureidini también aborda la cuestión de la discriminación al hacer referencia a la migración laboral y la xenofobia en el Medio Oriente, donde está produciéndose la llegada masiva de inmigrantes para realizar trabajos a corto plazo. La migración de trabajadores de bajo costo procedentes de Asia y de África ha dado lugar al surgimiento de un mercado laboral secundario de carácter racial en aquella región. Estos trabajadores se asocian con trabajos sucios, peligrosos o difíciles que los nacionales se niegan a realizar, no obstante la pobreza y el desempleo generalizados. Una característica fundamental del contrato en que se basa el reclutamiento de mano de obra para estos trabajos, es el régimen de sumisión a que dicha mano de obra se somete. Es decir, a los trabajadores no se le permite el acceso a los mercados de trabajo locales sin la aprobación estatal y están sujetos a un patrocinador durante la vigencia de todo el contrato. Jureidini señala que las condiciones de esclavitud, tales como, amenazas de violencia, restricciones para el movimiento, condiciones de trabajo inhumanas y abuso generalizado, afectan a muchas trabajadoras domésticas internas. Jureidini hace un llamamiento para que se introduzcan y refuercen leyes laborales locales y convenios internacionales con el fin de proteger a dichos trabajadores.

El racismo a menudo precisa de grupos movilizadores, organizaciones y un discurso para activarlo o sostenerlo. Según **Hans-Georg Betz**, el surgimiento de una nueva forma de populismo exclusionista por partidos políticos de derecha, su-

pone una amenaza para el orden liberal establecido en Europa. Estos partidos abogan por una ciudadanía de forma restrictiva, es decir, sólo los ciudadanos coétnicos o los ciudadanos que gozan de este estatus desde hace tiempo deberían disfrutar del pleno derecho de ciudadanía. La transformación de los partidos de izquierda en organizaciones de centro, en las que el trabajador promedio se siente abandonado, ha permitido a la derecha populista colmar la laguna. Sin embargo, Betz confía en que las instituciones de la democracia occidental serán suficientemente fuertes como para hacer frente a este desafío.

Gobernabilidad y justicia social

En el documento presentado por **Glenn C. Loury**, el autor desafía la ideología dominante—el individualismo liberal—contraria a la acción afirmativa de los Estados Unidos. Esta ideología defiende una política de ceguera racial, es decir, la práctica de no considerar la raza al aplicar una política. El autor distingue la ceguera racial de la indiferencia racial, es decir, la práctica de no considerar el modo en que una norma determinada puede afectar a diversos grupos raciales. Ambas pueden beneficiar a las minorías o agravar su desventaja social. Sin embargo, Loury señala que, dada la historia de racismo en los Estados Unidos, deberían evaluarse asimétricamente los efectos de las políticas regidas por la ceguera racial o la indiferencia racial, de forma que se estableciera un nuevo orden de preocupaciones morales. Esto supondría anteponer la justicia racial a la ceguera racial o la indiferencia racial. Concluye observando que, cuando las universidades más destacadas recurren a la acción afirmativa en los procesos de admisión, refuerzan considerablemente la reorganización de las prioridades morales—la necesidad de crear un marco de liderazgo estadounidense que incluya tanto a la población afroamericana como a otros grupos minoritarios.

Khoo Boo Teik aborda los efectos de las políticas de acción afirmativa en Malasia

y sus consecuencias para Indonesia. La inestabilidad económica que predomina desde la crisis financiera de 1997 ha provocado disturbios raciales y étnicos en Indonesia, mientras que en Malasia, que tiene una historia de violencia racial, parece haberse evitado la implosión etnoracial. Por el contrario, la presión a favor de un cambio en Malasia ha atraído a una coalición de organizaciones procedentes de diversos grupos, afiliaciones religiosas e ideologías. Los analistas atribuyen el éxito relativo de Malasia en la gestión de las relaciones etnoraciales a su programa de acción afirmativa anterior a la crisis—la Nueva Política Económica (NPE). Este programa redistributivo ha beneficiado a los malayos vis à vis los chinos. Khoo pone de relieve que la NPE incorporó otros objetivos relacionados con una gran capacidad para la formulación de políticas, la intervención del Estado en la economía y otras formas de gobierno asociadas con el estado del desarrollo de Asia Oriental. Parece que los efectos generales de la estrategia han sido la recomposición radical de la estructura de clases en Malasia, el cambio de equilibrio de poderes entre diferentes grupos y el empoderamiento del Estado para ofrecer resultados económicos y políticos. Sin embargo, Khoo señala que la aplicación sistemática en Indonesia de políticas de acción afirmativa como las de Malasia podría ser difícil en un entorno global que desalienta el nacionalismo económico.

El artículo de **Robert D. Bullard** analiza el racismo ambiental, definido como práctica que beneficia a las empresas que contaminan el medio ambiente y que responsabiliza de ello a las personas de color. Bullard señala que el racismo ambiental influye en la utilización local de la tierra, fomenta la inobservancia de la regulación ambiental, y legaliza la exposición de las personas a productos químicos nocivos y a tecnologías peligrosas. La lucha contra el racismo ambiental requiere aceptar la protección ambiental como derecho humano fundamental; el cumplimiento

no discriminatorio de las leyes relativas al medio ambiente, la salud, la vivienda y los derechos civiles; el cierre de brechas de la ley tributaria en las empresas, que alientan a estas últimas a contaminar los entornos de las personas más pobres y desfavorecidas; y la formulación de regulaciones y acuerdos internacionales efectivos.

Los cambios operados desde 1948

En “Una última palabra”, **Rodolfo Stavenhagen** realiza un seguimiento de la evolución de las ideas acerca de la raza, la ciudadanía y la justicia desde el establecimiento de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 confirmó el principio de los derechos y libertades fundamentales, y prohibió la discriminación por motivos de raza y otras divisiones humanas. Las luchas anticoloniales que caracterizaron los decenios de 1950 y 1960 condujeron a la incorporación del derecho de autodeterminación en la Declaración de 1960 sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Esta declaración marcó un cambio en las actitudes e ideologías raciales hacia los derechos de los pueblos y el establecimiento de un orden mundial equitativo. La migración del Sur a las sociedades industriales del Norte dio lugar al surgimiento de nuevas formas de racismo en los años 70 y 80, lo que tuvo consecuencias en las vidas de las minorías raciales, los trabajadores migrantes y los refugiados. Sin embargo, la migración también dio lugar al concepto de multiculturalismo, o al derecho de ser diferente, y, en los últimos tiempos, a la noción de interculturalidad. Este último concepto propone reforzar la diversidad a través de formas flexibles de gobierno que no se ciñan exclusivamente a un modelo de “Estado-nación”.

Yusuf Bangura es Coordinador de Investigación en UNRISD. Los ocho documentos seleccionados en esta edición pueden consultarse en www.unrisd.org.

La construcción histórica de la raza y la ciudadanía en los Estados Unidos

George M. Fredrickson

Muchas naciones han basado su identidad en su ascendencia de una serie de antepasados comunes, que supuestamente legaron a sus descendientes una lengua y una cultura distintivas. Sin embargo, Estados Unidos —como corresponde a una “nación de inmigrantes”—normalmente se ha definido a sí misma más bien por una serie de ideas y valores políticos asociados a sus orígenes revolucionarios que por el origen y carácter étnico de su población. No obstante, su “nacionalismo cívico” no impidió la utilización de “raza” física, especialmente en vista de las diferencias de pigmentación establecidas, al determinar el estatus social y político durante la mayor parte de su historia.

Aunque la Revolución Americana fue un llamamiento a los conceptos universales de los derechos humanos que se desprendían de la Ilustración, la Constitución de 1789 autorizó la denegación del derecho de ciudadanía a las personas de ascendencia africana, como consecuencia de su esclavitud, y confinó a los pueblos indígenas conquistados a un estado de dependencia. La Ley de Inmigración de 1790 puso explícitamente de manifiesto las diferencias raciales al limitar el derecho de naturalización a los “blancos libres”. En los decenios de 1820 y 1830, el sufragio se extendió a todos los hombres de raza blanca, pero se negó a la mayoría de los “negros libres”. Al aumentar la polémica sobre la esclavitud en los decenios de 1830, 1840 y 1850, los defensores de la esclavitud de la población negra basaron cada vez más sus argumentos en ideologías racistas pseudo-científicas. Tras el fallo Dred Scott de la Corte Suprema en 1857, se denegó el derecho de ciudadanía a todos los afroamericanos—libres o esclavos.

El racismo era un fenómeno nacional cuando estalló la Guerra Civil. A menudo se marginaba a “los negros libres” en los Estados del Norte y se les denegaban derechos legales y políticos. En algunos Estados y territorios incluso se les prohibía la entrada. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la emancipación y la utilización de tropas integradas por personas de raza negra fueron

La verdadera ciudadanía supone algo más que una igualdad legal formal. También conlleva una igualdad en el respeto y el deseo de una mayoría étnoracial de reconocer, de palabra y obra, que los miembros de una minoría pertenecen a la nación.

esenciales para defender la Unión, por lo que los afroamericanos pudieron solicitar la igualdad de ciudadanía, que se les otorgó al aprobarse la Enmienda 14 a la Constitución, introducida en 1868. Así pues, se concedió la ciudadanía nacional a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, con independencia de su raza, a excepción de los indios que vivían en comunidades tribales. En 1870, la Enmienda 15 a la Constitución declaró ilegal negar el derecho de voto por motivos de “raza, color, o condición previa de esclavitud”. A partir de entonces, la desigualdad legal y política no podía basarse explícitamente en la diferencia racial.

Sin embargo, la reforma constitucional igualitaria no se tradujo en una igualdad sustancial para los afroamericanos. La verdadera ciudadanía supone algo más que una igualdad legal formal. También conlleva una igualdad en el respeto y el deseo de una mayoría étnoracial de reconocer, de palabra y obra, que los miembros de una minoría pertenecen a la nación. Durante la era de Jim Crow, es decir, desde principios del decenio de 1880 hasta finales del decenio de 1960, se discriminaba, privaba de sus derechos civiles y atemorizaba a la población negra en el Sur. En los Estados Unidos, el racismo ideológico—orientado no sólo a las personas de raza negra, sino a todo aquel que no fuera definitivamente blanco—alcanzó su punto más álgido a finales del siglo XIX y principios del XX. La mayor parte de la inmigración china, que comenzó en 1882, estaba prohibida. También se cuestionó la forma física de los inmigrantes procedentes del Sur y Este de Europa por motivos de raza, y las leyes de inmigración aprobadas en el decenio de 1920 establecieron un sistema de cuotas basado en creencias sobre las características inherentes a diversas poblaciones. El “americanismo atribuido” había triunfado aparentemente sobre el liberalismo universalista que había inspirado el movimiento abolicionista y las enmiendas constitucionales posteriores a la Guerra Civil.

La extensión e intensificación del racismo entre los decenios de 1880 y 1920 fue consecuencia de la interacción entre estereotipos raciales ya integrados en la cultura, y de tensiones asociadas con el establecimiento de la clase y del estatus en una sociedad capitalista que experimentaba una rápida

industrialización. Las personas de raza blanca pertenecientes a clases trabajadoras o más bajas podían llegar a la conclusión de que los trabajadores racialmente diferentes y mal remunerados constituían una amenaza para su situación económica, y de que, como indemnización por su propia pobreza y falta de oportunidades, podría apoyarse su estatus racial o étnico en calidad de “salario psicológico”. Las clases selectas establecidas podrían impedir el conflicto de clases alentando las divisiones etnoraciales entre las clases menos favorecidas, o podrían apoyar su estatus y autoridad como americanos privilegiados oponiéndose a la inmigración de las personas consideradas racialmente inferiores.

Entre los decenios de 1930 y 1970, los miembros de las minorías raciales y sus partidarios lucharon por establecer un concepto de ciudadanía más amplio y aplicable—que cumpliera la promesa igualitaria contenida en la Declaración de la Independencia de 1776. El programa conocido como New Deal difundió un nuevo concepto de ciudadanía social en 1933—“liberarse de la necesidad”, como diría Roosevelt—pero en un principio las nuevas políticas de seguridad social no contemplaban a la mayoría de la población negra. Sin embargo, la migración masiva de la población negra del Sur hacia el Norte dio lugar a que ésta recuperara su derecho de voto y a que aumentara su influencia política. Al mismo tiempo, los científicos sociales y naturales luchaban contra el racismo científico. Pero, fundamentalmente, el reformismo racial se impulsó a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la repulsión ante el racismo nazi durante la posguerra. El movimiento de derechos civiles, que tuvo un éxito parcial en los años 50 y 60, también adquirió legitimidad debido a la necesidad estratégica de los Estados Unidos de competir con la Unión Soviética por “las mentes y las almas” de las personas de color recientemente descoloni-

zadas en África y Asia. Las leyes de Derechos Civiles de 1964 y 1965, y la eliminación al mismo tiempo de las cuotas de inmigración justificadas por motivos de raza, pueden atribuirse al resurgimiento de las ideas igualitarias aparentemente olvidadas cuando, al cambiar las circunstancias, pareció que aquellos ideales servirían el interés nacional, al igual que los intereses de grupos influyentes de la sociedad.

La conciencia étnica cada vez mayor de las personas de raza negra y el deseo de los inmigrantes hispanos y asiáticos de preservar su cultura han dado lugar a que el ‘multiculturalismo’, más que el simple integracionismo o asimilacionismo, sea la ideología antirracista dominante en los Estados Unidos en la actualidad.

Gracias a las Leyes de Derechos Civiles, los derechos legales y políticos de la ciudadanía pudieron respetarse en mayor grado, pero no se estableció el derecho a igual respeto para las personas aún consideradas “distintas” por una mayoría de americanos de raza blanca. Además, en el decenio de 1980, la ciudadanía social anunciada por el programa New Deal comenzó a desintegrarse y sus consecuencias fueron nefastas para las minorías. Las estadísticas contemporáneas que revelan el encarcelamiento, el desempleo, el aislamiento social y la indigencia de un porcentaje más alto de personas de raza negra que de raza blanca ponen de manifiesto que la desigualdad estructural asociada a la raza sigue siendo un problema central en la sociedad es-

tadounidense. Aunque ya no está sancionada legalmente, la discriminación persiste—no sólo contra afroamericanos, sino también contra la población hispana de bajos recursos. La discriminación contra los inmigrantes asiáticos persiste igualmente, pero adopta formas más sutiles. La conciencia étnica cada vez mayor de las personas de raza negra y el deseo de los inmigrantes hispanos y asiáticos de preservar su cultura han dado lugar a que el “multiculturalismo”, más que el simple integracionismo o asimilacionismo, sea la ideología antirracista dominante en los Estados Unidos en la actualidad.

La construcción histórica de la raza y la ciudadanía en los Estados Unidos es única entre las naciones occidentales, debido a la coexistencia de una tradición universalista de derechos humanos y una fuerte tendencia histórica hacia la exclusión racial. Pueden establecerse comparaciones útiles con Francia, que también cuenta con una tradición universalista de derechos humanos, pero cuyas conclusiones más bien se han basado en motivos culturales o religiosos que en la raza en un sentido físico; y también con la tradición alemana de tajante nacionalismo étnico que se materializó de una forma atroz en la época nazi. La identidad alemana anterior a 1945 suponía un rechazo categórico de las ideas de libertad individual y gobierno democrático propias de la Ilustración, a las que se adherían la mayoría de los estadounidenses de raza blanca—sin que ello les impidiera, no obstante, discriminar a los que consideraron biológicamente incapaces de autogobernarse.

George M. Fredrickson es el Edgar E. Robinson Profesor Emérito de Historia de los Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, California.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

Realidades controversiales: La raza, el género y la política pública en Aotearoa/Nueva Zelanda

Tracey McIntosh

La identidad, tanto personal como colectiva, se forja en la realidad material en que vivimos. Nuestras identidades de género determinan en gran medida la percepción propia y ajena de nosotros mismos. En el marco de esta percepción también tiene cabida la ubicación de nuestra clase social. Sin embargo, el origen étnico se encuentra en otra dimensión y algunas identidades étnicas provocan una reacción mucho mayor y más marcada que otras. La experiencia maorí de la colonización y la realidad contemporánea de la marginación y las privaciones en su vida cotidiana, ponen de manifiesto que la identidad étnica en Aotearoa/Nueva Zelanda¹ es una cuestión de lucha y resistencia. Como *tangata whenua* (nativos, indígenas), la presencia de los maoríes en la sociedad neozelandesa es una cuestión muy controvertida. No hay una experiencia maorí única, ya que no todos se enfrentan a los mismos obstáculos ni disfrutan de los mismos privilegios. Aunque han desarrollado un fuerte sentimiento de conexión—un sentimiento de pertenencia a un grupo por la ascendencia, la tierra o por una historia compartida—la experiencia de ser maorí tiene miles de inflexiones.

Si entendemos que la política social consiste en directivas y acciones que inciden en el bienestar de los miembros de la sociedad, al influir en el modo en que se distribuyen los bienes y recursos, entonces debemos reconocer asimismo que este proceso beneficiará a algunos grupos y personas y redundará en perjuicio de otros. La consecución de *tino rangitiratanga* (autodeterminación, soberanía) es fundamental para la mayoría de los maoríes, pero su interpretación y los medios empleados a tales fines suscitan polémica. Asimismo, la población no maorí muestra una opo-

sición considerable a los programas y políticas encaminados a erradicar las diferencias sociales y económicas. Si bien el gobierno actual de Nueva Zelanda ha expresado su intención de respetar el Tratado de Waitangi (firmado en 1840 entre representantes de la corona inglesa y jefes maoríes)—y a “cerrar las brechas” entre la población maorí y no maorí en los ámbitos de la educación, la fuerza laboral, la vivienda y la salud—estos objetivos fueron recibidos con cierto cinismo por muchos maoríes y con una oposición rotunda en otros sectores de la sociedad neozelandesa. En los últimos 30 años, la política social de Nueva Zelanda se ha caracterizado por estos debates y por el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Tratado de Waitangi. Sin embargo, muchos maoríes dudan que la conciencia y la voluntad políticas basten para hacer frente a los motivos de las continuas desigualdades sociales y económicas, y algunos sectores de la población no maoríes se oponen terminantemente al establecimiento de políticas y programas que, a su juicio, favorecen más a los maoríes que a otros neozelandeses “comunes”. En este contexto, todas las cuestiones maoríes son políticas.

Los estudios exhaustivos realizados sobre las condiciones de los maoríes demuestran que, desde su nacimiento, se hallan en una situación de obvia desventaja. Un niño maorí tiene más probabilidades de morir que un niño no maorí, y menos probabilidades de recibir una educación en la infancia temprana. Aunque apenas se dispone de alguna información importante sobre su rendimiento en la escuela primaria, es bien sabido que los niños maoríes concluyen la escuela secundaria con niveles de calificación muy inferiores a los niños no maoríes. Asimismo, es mucho más probable que se expulse temporal

o definitivamente de la escuela a los niños maoríes, por lo que también aumentan las probabilidades de que su rendimiento escolar sea bajo y de que se involucren en la criminalidad juvenil. La tasa de desempleo de los maoríes es mucho más alta que la de la población no maorí, y sus ingresos considerablemente inferiores. Es más probable que los maoríes soliciten ayuda estatal o que dependan totalmente de los beneficios estatales. Muchos maoríes carecen de una vivienda adecuada, y su estado de salud física y mental es más delicado que el de la población no maorí. Las diferencias entre maoríes y no maoríes, y las desventajas de estos últimos en la jurisdicción penal son evidentes; su representación es excesiva como víctimas o como infractores.² Demasiadas personas asocian la condición de maorí con el desempleo, un mal estado de salud, enfermedades psiquiátricas, pobreza o prisión.

Las políticas dirigidas a los maoríes suscitan polémica. Las elaboradas para hacer frente a la discriminación racial pueden beneficiar a algunos sectores maoríes más que a otros y, en algunos casos, pueden perpetuar la opresión por motivo de clase o de género. Las mujeres maoríes, por ejemplo, encabezan la lucha para mejorar la situación social de sus comunidades, pero continúan cargando el mayor peso de la opresión social, política y económica. Las representaciones de las mujeres maoríes en el siglo XIX dejaron un legado de marginación *dentro y fuera* de la sociedad maorí. Por ejemplo, muchas organizaciones maoríes modernas que se consideran estructuras indígenas tradicionales, en realidad son entidades con una administración y normas coloniales. Estas organizaciones a menudo benefician a determinados grupos de personas y, en muchos casos, hacen de las posiciones de poder y toma

de decisiones, un espacio exclusivamente masculino.

La desvalorización de las mujeres maoríes ha tenido consecuencias negativas en todos los aspectos de la vida maorí—niños, relaciones, familias y comunidades han sufrido las consecuencias, en detrimento de las vidas de los hombres y mujeres maoríes. Sin embargo, también ha permitido a los hombres maoríes ampliar sus ámbitos de poder y dominio con respecto a las mujeres maoríes. Las mujeres maoríes cultas han observado que los hombres maoríes llegan a considerarse en gran parte protectores, promotores e intérpretes legítimos de la cultura maorí, lo que ha propiciado que los intereses de los hombres maoríes se perciban simplemente como intereses de los maoríes en general. Si bien el Tratado de Waitangi reconoce y promete proteger los derechos de los maoríes, la política de estado, histórica y actual, relativa a los maoríes, se ha propuesto acabar con estos derechos y sustituirlos por derechos individuales, de conformidad con

la política legal y social del mundo occidental/no maorí. Este enfoque beneficia fundamentalmente a los hombres. Las mujeres maoríes siguen esperando que se les vincule y considere al mismo nivel que los hombres maoríes, basándose en el reconocimiento de que la solidaridad es esencial para lograr objetivos y para preservar los valores en su cultura. Sin embargo, estas mujeres también siguen luchando por ostentar cargos de igual importancia y responsabilidad. Para que la política social, la legislación y la acción fomenten el bienestar, es necesario establecer un mecanismo de reparto de poderes y de inclusión participativa en lugar de reproducir y legalizar relaciones de poder desiguales.

No obstante el sorprendente renacimiento de la cultura maorí en los últimos 30 años, apenas se han realizado progresos al tratar otras desigualdades sociales a las que se enfrentan diariamente los maoríes. Si bien la cultura es fundamental para el bienestar físico y espiritual, esto sólo podrá lograrse ple-

namente cuando las luchas cotidianas y sus soluciones se aborden con la misma determinación que las consideraciones culturales. Por consiguiente, no sólo es preciso luchar para mantener y fomentar la cultura, sino también para asegurar la equidad en el ámbito económico y político, y tener el acceso a los recursos, el poder y los conocimientos.

Tracey McIntosh es Lectora del Departamento de Sociología en la Universidad de Auckland, Nueva Zelandia.

¹ Aotearoa (“la tierra de la larga nube blanca”) es el nombre que dieron al país los primeros colonizadores polinesios.

² Te Puni Kokiri (Ministro de Fomento Maorí), **Progress Towards Closing Social and Economic Gaps Between Maori and Non-Maori**, Te Puni Kokiri, Wellington, Nueva Zelandia, mayo de 2000.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

El trabajo contractual temporal y las prácticas xenófobas en el Medio Oriente

Ray Jureidini

La emigración masiva de trabajadores a los países árabes del Medio Oriente tras el auge de los precios del petróleo a mediados del decenio de 1970, la consiguiente sustitución (a partir de mediados de los años 80) de un gran número de trabajadores árabes por trabajadores de Asia Oriental y Sudoriental, y el constante flujo y reflujo de la economía en los años 90, constituyeron una de las grandes sagas de la migración en la segunda mitad del siglo XX.

Como en la mayoría de los países del mundo, las normas aplicables a los trabajadores extranjeros en los estados

árabes del Medio Oriente impiden su integración en los mercados laborales locales. En estos países en particular, estos trabajadores se incorporan a los mercados bajo la responsabilidad de un empleador convenido de antemano que actúa como su patrocinador, y con un contrato de empleo de duración limitada. Se exige al patrocinador que tramite los permisos de trabajo y de residencia que permiten la contratación del trabajador extranjero. Éste no está autorizado a cambiar de empleo en el país—al menos no sin el permiso expreso de las autoridades estatales. Al expirar un contrato, se exige al traba-

jador que abandone el país, salvo que se renueven tanto el contrato como el permiso gubernamental apropiado. Por lo general, los trabajadores extranjeros temporales no tienen derechos de ciudadanía ni sindicales. Así pues, puede clasificarse a estos trabajadores, independientemente de sus calificaciones, como fuerza de trabajo “no libre” en el país receptor.

De 1980 a 1985, aproximadamente 4 millones de trabajadores tanto calificados como no calificados, emigraron a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es decir, a

Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de ellos procedían de otros países árabes—Egipto, Jordania, Líbano y Yemen—pero también se contrató a trabajadores de Sudán, de los territorios palestinos, de Pakistán y de la India. En Arabia Saudita y Kuwait, por ejemplo, la población prácticamente se duplicó a raíz de la inmigración. A mediados de los años 80, el porcentaje de trabajadores asiáticos estaba creciendo continuamente en los países del CCG. Estos últimos procedían sobre todo de Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur y Sri Lanka (en 1990, la fuerza laboral migrante de Bangladesh y Sri Lanka representaba más del 20 por ciento de la fuerza laboral asiática en la región). La contratación de asiáticos se incrementó en parte porque esta mano de obra era más barata que la de otros estados árabes, pero también porque se consideraba que una diversificación de nacionalidades desviaría la invasión política de otros árabes (particularmente yemeníes, palestinos y egipcios) hacia los países receptores. Así pues, la creciente incorporación de asiáticos a la fuerza laboral migrante fue conveniente desde una perspectiva tanto política como económica.

La caída de los precios del petróleo a mediados de los años 80 provocó la reducción proporcional de los ambiciosos programas de desarrollo de la infraestructura donde trabajaban numerosos extranjeros en los países del CCG. Pero este cambio de perspectivas económicas raramente afectó a la demanda de mano de obra extranjera en los sectores de los servicios y, en particular, la demanda por trabajadores no calificados. Dado que los trabajadores extranjeros “baratos” de los países asiáticos y africanos satisfacían esta demanda, los trabajos en los mercados de trabajo secundarios fueron cada vez más “raciales”. Es decir, los trabajos sucios, peligrosos y difíciles se asociaron con trabajadores extranjeros, y los nacionales se negaban a realizarlos,

aun estando desempleados. Por lo general, los nacionales activos laboralmente realizaban trabajos más especializados y en el sector de los servicios públicos. La demanda de trabajadores domésticos tampoco mostró indicios de estar en decadencia—de hecho, cada vez abundaba más este tipo de trabajadores, fundamentalmente mujeres procedentes de Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka.

El sentimiento xenófobo contra los trabajadores migrantes (y en particular contra los trabajadores domésticos) en el Medio Oriente se caracteriza por tres aspectos. En primer lugar, se muestra preferencia por los trabajadores de contratos temporales; por lo que es más fácil prescindir de ellos y se les impide la posibilidad de obtener la ciudadanía.

En segundo lugar, los nacionales generalmente reciben un trato preferencial, aunque algunos tipos de trabajo de baja categoría se “asignan” a extranjeros. En algunos países del Golfo se han introducido políticas encaminadas a reducir la “dependencia” del país de la fuerza laboral extranjera, lo que está traducéndose en una fuga de miles de millones de dólares anuales de sus economías en forma de envío de dinero a los países emisores de mano de obra. La falta de incentivos incluye el aumento de los impuestos sobre los permisos de trabajo y de residencia, la eliminación del acceso a servicios de salud y educación gratuitos (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos), y la prohibición de contratar a determinados trabajadores muy calificados—con el objetivo de promover la “indigenización” en sectores particulares (Arabia Saudita).

El tercer aspecto del sentimiento xenófobo (y racista) es la actitud de desprecio y abuso hacia las personas que son visiblemente “diferentes” (en particular nativos de Sri Lanka, Filipinas y Etiopía, y otros africanos), que se manifiesta evidentemente en el trato

que reciben de los nacionales, especialmente de los empleadores. El trato a las empleadas domésticas constituye el mejor ejemplo, debido a su presencia “extranjera” en la esfera doméstica privada. En efecto, son constantes las quejas sobre “las sirvientas”—en los hogares, y en las reuniones familiares y sociales.

En los estudios realizados en Jordania, Kuwait, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos se muestra que las relaciones y condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas extranjeras constituyen una forma contemporánea de esclavitud. Además de numerosos informes presentados sobre el abuso físico, sexual, mental y emocional de estas trabajadoras, la amenaza de violencia siempre está presente si “escapan” (el uso extendido de este término es revelador) de sus empleadores. Las restricciones a la libertad son severas, ya que muchas empleadas no pueden abandonar el hogar sin permiso o sin compañía, o se les impide comunicarse libremente con el mundo exterior. Dado que los empleadores generalmente retienen los pasaportes de sus trabajadoras domésticas, la “fuga” de las mismas generalmente se traduce en su arresto, detención y deportación (a menos que sean rescatadas por su empleador), con todos los peligros que esto conlleva. Por último, la explotación económica es absoluta; se exige a los empleados que trabajen entre 14 y 18 horas diarias, sus dormitorios son inadecuados y su privacidad es mínima o inexistente.

Si bien existe una legislación penal local que puede utilizarse en casos de abusos graves, los trabajadores domésticos extranjeros generalmente no están amparados por las leyes laborales locales, las convenciones de las Naciones Unidas ni los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Está ampliamente aceptado que la convención más aplicable a los trabajadores migrantes, y a las empleadas domésticas en particular, es la Convención internacional de las Naciones

Unidas para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias (1990). Sin embargo, esta convención no ha sido ratificada por 20 países, por lo que aún no ha entrado en vigor.

No puede afirmarse que se maltrate a todos los trabajadores migratorios domésticos y otros trabajadores migratorios. Sin embargo, unos convenios

legales, administrativos y contractuales establecidos pueden crear un entorno que propicie su vulnerabilidad a prácticas similares a la esclavitud, el racismo y la xenofobia. Para proteger a estos trabajadores, no sólo es preciso introducir leyes laborales locales, y convenios y convenciones internacionales, sino que estos instrumentos deben cumplirse en los planos tanto local como internacional.

Ray Jureidini es Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad Americana de Beirut.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

El populismo exclusionista y la ideología diferencialista en Europa Occidental: ¿Una amenaza para la democracia liberal y los derechos civiles?

Hans-Georg Betz

Los partidos populistas radicales de derecha son uno de los nuevos actores políticos más importantes en las democracias contemporáneas de Europa Occidental. En efecto, en los últimos años, el éxito electoral de la derecha populista ha sido menos impresionante que en los años 80 y principios del 90. En Francia, la escisión del partido Front National representó un duro golpe para Jean-Marie Le Pen, con respecto a sus expectativas de las elecciones presidenciales. En Austria, los votantes expresaron su desencanto retirando masivamente su apoyo al Freiheitliche Partei, después de que éste constituyera una coalición gubernamental de centro-derecha con el Volkspartei. En Italia, el apoyo a la Lega Nord liderada por Umberto Bossi ha quedado limitado a las zonas interiores de Lombardía y Véneto. En Dinamarca y Noruega, el apoyo a la derecha populista se ha estancado. Incluso en Bélgica, el ritmo de los progresos realizados hasta ahora por el partido Vlaams Blok ha disminuido. La derecha populista sólo ha progresado en Suiza, desde que el Schweizerische Volkspartei adoptó una imagen populista.

Sin embargo, sería un error permanecer complaciente ante el desafío que la derecha populista supone para la democracia liberal. La inclusión de partidos populistas de derecha en los gobiernos

nacionales de Austria e Italia es un caso significativo. Las ideas y programas exclusionistas de la derecha populista plantean un desafío incluso mayor, ya que han demostrado ser atractivos para otros focos de población distintos del habitual. Los principales elementos de esta doctrina política son: un concepto restrictivo de ciudadanía según el cual la verdadera democracia se basa en una comunidad, si no étnicamente, por lo menos culturalmente homogénea; el concepto de que solamente los ciudadanos que gozan de tal estatus desde hace tiempo sean miembros de pleno derecho de la sociedad civil; y el convencimiento de que los beneficios de la sociedad deberían limitarse a aquellos que contribuyen considerablemente a la misma. El espíritu de la doctrina está expresado más intensamente en el concepto “nuestra gente primero” y en la exhortación a la “preferencia nacional”. En su expresión extrema, el populismo exclusionista es análogo a una nueva forma de nacionalismo cultural que, en lugar de promover ideas de superioridad étnica y cultural, tiene por objeto proteger la sociedad, el estilo de vida y los valores “propios” frente a la intrusión y contaminación de lo extranjero.

La lógica y la justificación del populismo exclusionista y el nativismo cultural se desprenden de una ideología diferencialista que la derecha populista ha adopta-

do en los últimos tiempos de la *nouvelle droite* francesa. Éste fue un movimiento intelectual que adquirió notoriedad durante un breve periodo en el decenio de 1970, a pesar de no tener gran influencia en el discurso político en Francia ni fuera del país. Según los principios fundamentales de la ideología diferencialista, los seres humanos son iguales pero diferentes, la diversidad enriquece el mundo, y debe hacerse todo lo posible por preservar la identidad cultural. En los últimos años, la derecha populista se ha centrado cada vez más en “el derecho de las personas a ser ellas mismas”, tanto para justificar su rechazo fundamental de la inmigración y el multiculturalismo, como para justificar sus ataques contra las clases políticas e intelectuales—acusadas de promover el universalismo, el desarraigo y, sobre todo, la mundialización. En una época en que la mayoría de los partidos tradicionales de izquierda han relegado considerablemente al trabajador promedio para centrarse exclusivamente en las vicisitudes del capitalismo globalizado, la derecha populista se ha apresurado a llenar la laguna ideológica. En la actualidad, es más probable hallar a los defensores actuales del proletariado en las filas del Front National y sus imitadores europeos que entre socialistas y demócratas sociales.

En los últimos años—y no solamente desde los eventos del 11 de septiembre

de 2001—la derecha populista se ha esforzado por promover su imagen de guardián y defensor de la civilización, de los valores occidentales y, lo que es más curioso, del cristianismo. Al mismo tiempo, la derecha populista ha cambiado gradualmente su opinión sobre la inmigración. Si bien sigue siendo contraria a la misma en términos generales, ha señalado que no todos los inmigrantes son iguales y que, más bien, la medida en que puede aceptarse a los inmigrantes depende ante todo de su capacidad y voluntad de asimilación. Esta línea de razonamiento sostiene que la asimilación es más fácil para los inmigrantes que comparten valores culturales con el país receptor que para aquellos que proceden de culturas totalmente diferentes.

Al establecer sus fundamentos, la derecha populista redescubrió el cristianismo y los valores tradicionales; lo que es irónico ya que, tradicionalmente, los partidos populistas de derecha habían mostrado una firme tendencia contra la Iglesia. Con el descubrimiento del Islam como enemigo principal, la derecha populista ha comenzado a reconsiderar su relación con la Iglesia y el cristianismo. Por ejemplo, el *Freiheitliche Partei* de Austria enfatiza en su programa más reciente que el cristianismo, junto con el mundo antiguo, es “el fundamento espiritual de Europa”. Para proteger este fundamento y defender sus valores, el partido exhorta actualmente a la constitución de una cristiandad militante. En Italia, la *Lega Nord* creó recientemente una asociación católica encaminada a revivir y reforzar el compromiso con los valores cristianos tradicionales. Asimismo, tras los eventos del 11 de septiembre, algunos miembros dirigentes del partido—que, después de todo, es miembro de la coalición gubernamental de centro-derecha establecida en la actualidad—hicieron un llamamiento para que las fronteras de Italia se cerraran completamente a los musulmanes que desearan entrar en el país y se diera preferencia a los inmigrantes procedentes de países católicos.

Las opiniones antiislámicas expresadas por la derecha populista no deberían ser consideradas como sustituto del antemitismo, ahora que este último se considera una postura política inaceptable en Europa. En el discurso de la derecha populista, el antiislamismo ha reemplazado el anticomunismo, que para la extrema derecha sólo fue una mitad de la historia, siendo la otra mitad el antiamericanismo. Tanto el anticomunismo como el antiamericanismo fueron motivados por el temor fundamental a la filosofía considerada por la derecha extrema como la naturaleza subversiva de “la cultura *VodkaCola*”, que inevitablemente conduciría a la destrucción de la identidad nacional y de la cultura autónoma. En el discurso actual de la derecha populista, la mundialización, como proceso y como ideología, es decir, lo que el *Front National* ha denominado “*mondialisme*”, constituye la gran amenaza. La derecha populista se halla entre los oponentes más marcados y elocuentes de la mundialización—su ideología armoniza los términos y conceptos de la izquierda tradicional con la retórica xenófoba de la derecha para constituir una nueva ideología populista concebida al objeto de atender una serie de preocupaciones y resentimientos comunes en la Europa Occidental actual.

Aún es demasiado pronto para determinar si esta nueva ideología ayudará a la derecha populista a recuperar el apoyo electoral que había perdido y a atraer a nuevos electores potenciales. En los últimos años, la base electoral de la derecha populista ha experimentado una proletarianización considerable, lo que no es muy sorprendente, dados los grandes esfuerzos desplegados por el movimiento para atraer a aquellos grupos de la sociedad de Europa Occidental que se consideran fundamentalmente amenazados por la “gran transformación” que comenzó tras el fin de la Guerra Fría. Estos grupos están constituidos en gran parte por trabajadores manuales, que se sienten marginados por su falta de calificaciones necesarias para realizar los tra-

bajos creados por la “nueva economía”, pero también hay trabajadores calificados, que consideran desvaloradas su experiencia y calificaciones profesionales como consecuencia de la incesante campaña para promover la automatización y la digitalización. Éstos y todos los demás grupos partidarios de la derecha populista tienen en común una marcada desconfianza hacia la elite política establecida y al proceso democrático en general, que a menudo parece opaco, distante e interesado. Al mismo tiempo, comparten el resentimiento profundamente enraizado contra los extranjeros que viven en su entorno, a quienes ven como competidores para la obtención de recursos y beneficios sociales que cada vez son más escasos.

Dada la confluencia actual de presiones competitivas cada vez mayores derivadas de la mundialización, de presiones demográficas cada vez más fuertes debidas al rápido envejecimiento de las sociedades europeas, y del considerable descontento político que persiste entre la población; parece probable que el populismo exclusionista diferencialista continúe siendo un gran desafío para la democracia liberal en Europa Occidental. Aunque la estabilidad y solidez de las instituciones y cultura políticas en Europa Occidental probablemente impidan que la democracia se vea amenazada por la derecha populista, ésta necesita ser vigilada cuidadosamente y, al mismo tiempo, se le debería comprometer—y desafiar sus posturas de forma objetiva y mesurada—cuando menos, a reforzar la confianza en la democracia liberal y apoyarla.

Hans-Georg Betz es Profesor Asociado de Ciencias Políticas en el Centro Canadiense de Estudios Alemanes y Europeos de la Universidad de York, Toronto, Canadá.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

Justicia racial y políticas de acción afirmativa: La moralidad superficial de la ceguera racial en los Estados Unidos

Glenn C. Loury

En este artículo cuestiono la pertinencia del individualismo liberal como paradigma filosófico para abordar cuestiones de justicia racial en los Estados Unidos. Mis inquietudes son de carácter normativo (al tratar de evaluar la moralidad pública de las respuestas políticas alternativas al flagelo que supone la desigualdad racial) y conceptual (al intentar aclarar nuestra comprensión de los delicados procesos que crean y mantienen una duradera desigualdad racial).

Mi principal argumento es que el inextricable problema de la injusticia racial estira al máximo los recursos filosóficos del individualismo liberal. Esto significa que, en vista de las considerables y duraderas diferencias en cuanto a oportunidades vitales observadas entre los grupos raciales en Estados Unidos, los ideales en que se apoya el liberalismo de este país demuestran ser inadecuados para encauzar la realización de una acción pública moral. Una implicación del liberalismo individual a la que particularmente me opongo es la idea de que la respuesta apropiada a una historia de racismo y opresión, es el establecimiento de una política contemporánea de “ceguera racial”. Esto es, la no atención a la identidad racial de los ciudadanos.

De manera sucinta, mi problema con el individualismo liberal es que no logra comprender cómo las dinámicas, influidas por el estigma, en los ámbitos tanto de la interacción social como de la representación de la imagen de sí mismo, pueden inducir una desigualdad racial objetiva (independiente de los actos discriminatorios de las

personas) que se transmite de generación en generación, determinando la sensibilidad política y sociocognoscitiva de los ciudadanos de tal manera que la disparidad racial parezca

Adopto el término ‘ceguera racial’ para identificar la práctica de no tener presente la raza al aplicar una política, mientras que el término ‘indiferencia racial’ lo utilizo para referirme a la práctica de no pensar en la raza cuando se determinan las metas y objetivos por los que se adopta una política determinada. La cuestión moral clave con respecto a la raza está relacionada con la indiferencia, no con la ceguera.

natural y no discordante, obstaculice cualquier reforma y termine cerrando en la desigualdad. Para mí, el punto central es que los mismospreciados sujetos de la teoría liberal—individuos autónomos y de porte digno cuyo valor infinito (que acaba en sí mismos y que nunca es un medio para un fin) ha sido ensalzado por Immanuel Kant como centro del proyecto liberal—no “nacen”, sino que “se hacen”. Es decir, son producto de las relaciones sociales y de las instituciones económicas

y políticas—son frutos de los propios sistemas legislativos, del intercambio social y de las relaciones económicas que una teoría normativa pretende evaluar. Ni sus ideas sobre la buena vida ni (lo que es fundamental para mis propósitos) su conciencia de sí mismos como seres “raciales”, se forjan fuera de la dinámica de la historia y de la red de la cultura. Así pues, no puedo tolerar la imposición de críticas abstractas de neutralidad sobre un juego en el que las prácticas no neutrales sistemáticamente han dejado a tantas personas estigmatizadas y excluidas por razones de raza, con tan pocas buenas cartas para poder jugar.

Adopto el término “ceguera racial” para identificar la práctica de no tener presente la raza al aplicar una política, mientras que el término “indiferencia racial” lo utilizo para referirme a la práctica de no pensar en la raza cuando se determinan las metas y objetivos por los que se adopta una política determinada. Por ejemplo, si una regla de selección para la admisión a la universidad puede aplicarse sin conocer la identidad racial de los candidatos, entonces se entiende que dicha regla se rige por el principio de la “ceguera racial”. Si, por otro lado, se elige una norma de selección sin considerar cómo podría afectar los diversos grupos raciales, entonces puede decirse que esta norma aplica el principio de la “indiferencia racial”. La cuestión moral clave con respecto a la raza está relacionada con la indiferencia, no con la ceguera (lo que no niega, desde luego, que las “cuestiones de ceguera” pueden tener gran importancia en algunas ocasiones).

El poder de esta distinción entre “indiferencia” y “ceguera” resulta evidente al considerar que la mejoría o exacerbación de la desventaja social de la población negra se puede dar, de igual manera, con la aplicación de políticas ciegas a la raza. Sin embargo, mientras que una política de ceguera racial explícitamente orientada a perjudicar a la población negra jamás podría ser moralmente aceptable; la adopción de tales políticas con el propósito de reducir la desigualdad racial es común y no controversial. Esto es, dados los hechos en la historia de los Estados Unidos, las medidas adoptadas sobre la base de la indiferencia racial son y deberían ser evaluadas de manera desigual. Es decir, las que perjudican a la población negra son universalmente sospechosas, mientras que las iniciativas con un enfoque de no indiferencia racial que los benefician, son ampliamente reconocidas como necesarias para lograr una política social justa.

Para ilustrar este razonamiento, recientemente un tribunal federal emitió un fallo que prohíbe la práctica de la acción afirmativa en el proceso de admisión a las universidades de Texas. La legislatura estatal respondió garantizando un lugar en cualquier universidad pública al 10 por ciento de los alumnos de todas las escuelas secundarias en el Estado. Esa iniciativa, también llamada la “norma del 10 por ciento” beneficia principalmente a los estudiantes de escuelas secundarias menos competitivas—en su mayoría alumnos negros e hispanos—lo que sin duda fue el propósito; por lo que esta norma, si bien se adhiere al principio de la ceguera racial, definitivamente *no* es indiferente a la raza. Así pues, tenemos en Texas una situación en donde, por un lado, se prohíbe la consideración explícita de la raza en los procesos de admisión a la universidad; mientras que por el otro, su uso

intencional está permitido a través de la aplicación de un mandato público adoptado para lograr un resultado similar. Todavía queda la duda de que, si se hubiera adoptado un mandato diferente sobre ceguera racial, con el fin de excluir a estudiantes negros e hispanos de las instituciones públicas de Texas, ¿hubiera sido moralmente inaceptable? Este ejemplo muestra por qué la elección de ser indiferente a la raza es, a menudo, más ética que la opción de ceguera racial.

Ahora debería ser más fácil ver la pertinencia de la controversia en torno a la acción afirmativa para mi mayor argumento sobre las insuficiencias del liberalismo. Aquí, la cuestión más importante es: ¿Cuándo deberíamos proponernos explícitamente reducir las diferencias raciales y cuáles son los medios más apropiados para conseguir este objetivo? Considero que debe establecerse un orden de prioridades morales: la justicia racial debería anteponerse a la ceguera racial—lo que supone que las medidas adoptadas sobre la base de la “ceguera racial” para promover la igualdad racial no deberían excluirse por una cuestión de principios. La aceptación general de este punto de vista en la sociedad estadounidense tendría profundas consecuencias. Cuando las instituciones de renombre recurren a la acción afirmativa para limitar el acceso a las mismas, confirman este orden de prioridades morales de un modo firme y destacado. Al no ser “indiferentes” a los efectos raciales de sus acciones, optan por no estar “ciegos” en cuanto a la identidad racial de sus candidatos. Si se ven forzados a adoptar una actitud de ceguera racial, recurrirán a otras medidas para conseguir sus objetivos de igualdad racial. ¿Deberían actuar de este modo? *Ésta* es la cuestión clave, y el individualismo liberal no nos puede orientar mucho al respecto.

Al abordar la misma, me gustaría distinguir tres ámbitos de acción pública en una sociedad racialmente estratificada, donde pudieran aplicarse las intuiciones de “ceguera” de la neutralidad liberal:

- El primero es el ámbito de la *aplicación de políticas*—el cual determina los instrumentos de acción pública. Aquí estamos hablando de la admisión de estudiantes en la universidad, de la contratación de empleados o de la distribución de beneficios sociales. Algún mecanismo está siendo usado para hacer esto y dicho mecanismo pudiera o no reconocer oficialmente la raza de la persona. En este ámbito, la “ceguera” significa estructurar la conducta pública de tal manera que las personas de diferentes grupos raciales, quienes fuera de eso son similares, pueden esperar un trato similar. Esto es lo que la mayoría de las personas tienen en mente cuando insisten en que la política debería ser “ciega al color”.
- El segundo es el ámbito de la *evaluación de políticas*—que sopesa las consecuencias de la acción pública. Aquí estamos decidiendo construir una escuela, por ejemplo, y si ésta debería servir a la población en general o sólo a los estudiantes más destacados. Por lo general, antes de elegir el curso de una acción pública, es preciso evaluar los costes y beneficios relativos de las acciones alternativas. El efecto de una alternativa sobre grupos raciales en particular pudiera o no, ser considerada explícitamente en esta evaluación. La “ceguera” en este caso significa no considerar una política más o menos deseable teniendo en cuenta la raza del grupo afectado.

- El tercero es el ámbito de la *construcción cívica*—que fomenta el sentimiento de una nación con un objetivo y un destino en común. En este caso, estamos erigiendo monumentos, creando historias públicas, estableciendo rituales y, por lo general, siguiendo políticas que tienen un efecto inevitablemente expresivo y directamente instrumental. La “ceguera racial” en este ámbito significa el despliegue de los instrumentos de la pedagogía cívica para promover un sentimiento de comunidad nacional que trascienda las divisiones raciales.

Estos tres ámbitos—aplicación de políticas, evaluación de políticas y construcción cívica—dan lugar a tres tipos de cuestiones públicas. ¿Cómo deberíamos tratar a las personas? ¿Cómo deberíamos elegir los objetivos a conseguir por medio de las políticas? ¿Qué tanto conocimiento deberíamos tener de las formas en que la conducción de los asuntos públicos puede perpetuar aún en otra generación el heredado estigma de la raza?

Me parece que el individualismo liberal milita fuertemente a favor de la ceguera racial como postura moral en el primer y segundo ámbito. Sin embargo, el peso de mi argumento es para rechazar esa postura por ser no histórica y sociológicamente ingenua. Los procedimientos que se rigen por la “ceguera racial” no son adecuados como norma moral, entre otras razones porque no pueden tener en cuenta debidamente las consecuencias de su propia infracción. Además, una postura basada en principios sobre la indiferencia racial también es inaceptable porque descarta políticas (como la norma del 10 por ciento de Texas) reconocidas casi universalmente como necesarias y apropiadas.

Yo sostengo que es sólo en el tercer ámbito, donde el interés principal es la construcción de una comunidad nacional, en donde alguna noción de “ceguera racial” debería ser elevada al nivel de principio fundamental. La idea moral operativa debería ser que no se debiera erigir ningún límite cívico condicionado por la raza y, en los casos en que existan límites, es imperativo acabar con los mismos.

De esta manera, cuando las universidades practican la preferencia racial en los procesos de admisión, en efecto, se están esforzando, entre otras

Donde el interés principal es la construcción de una comunidad nacional, alguna noción de ‘ceguera racial’ debería ser elevada al nivel de principio fundamental. La idea moral operativa debería ser que no se debiera erigir ningún límite cívico condicionado por la raza y; en los casos en que existan límites, es imperativo acabar con los mismos.

cosas, para construir un cuadro de líderes afroamericanos de elite. De acuerdo con un estudio, la tasa promedio de admisiones de personas de raza blanca es alrededor del 25 por ciento; y se calcula que, de eliminarse toda acción afirmativa, esta tasa aumentaría aproximadamente al 27 por ciento.¹ Es decir, de cada 75 blancos rechazados bajo el sistema de admisiones que practica la preferencia racial en la actualidad, se seguiría rechazando a 73 de ponerse fin a la

acción afirmativa. ¿Para qué entonces tanta angustia, por qué retorcernos tanto las manos, por qué tanta preocupación de que se destruyan nuestras normas? ¿De qué sirve entonces tanta resistencia cuando, como revelan los datos, apenas se ha modificado el límite de la jerarquía racial en los Estados Unidos?

Considero que ningún aspecto del liberalismo político debería llevarnos a rechazar tal objetivo público. No hay nada malo en emprender iniciativas liberales y preocupadas por la justicia social para luchar contra el estigma racial. No hay nada malo en construir una elite racialmente integrada en Estados Unidos. Y, claro, e staría asombrado de que alguna persona reflexiva que esté consciente de la historia y estructura contemporánea de la sociedad estadounidense, pudiera pensar de otro modo.

Glenn C. Loury es el fundador y director del Instituto sobre Raza y División Racial de la Universidad de Boston, Massachusetts.

¹ William G. Bowen y Derek Bok, *The Shape of the River: Long-Term Consequences of Considering Race in College and University Admissions*, Princeton University Press, Princeton, 1999.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unriscd.org.

El conflicto étnico posterior a la crisis en Indonesia: ¿Lecciones de la Nueva Política Económica de Malasia?

Khoo Boo Teik

La crisis financiera de julio de 1997 desencadenó un derrumbamiento económico en Indonesia que acabó con el régimen del Nuevo Orden de Suharto. A continuación surgió la violencia étnica—contra la población china en Yakarta y en zonas rurales de Java, entre comunidades cristianas y musulmanas en Malaku, y por parte de los Dayak contra los Madureses en Kalimantan. La violencia étnica en Malasia posterior a la crisis sobrepasó los brotes de violencia anteriores, al ser de mayor escala y más espantosa, y al ser más variadas sus causas, antagonistas y puntos álgidos. Condensada en un periodo breve y tumultuoso, y agravándose mientras los regímenes posteriores a Suharto ofrecían pocas soluciones, la violencia (considerada junto con las luchas etnonacionalistas en Aceh y Papua) indicaba que las relaciones étnicas en Indonesia se hundirían en el caos.

En el país vecino de Malasia, el panorama de las relaciones étnicas era muy distinto. Si bien sufrió igualmente los efectos adversos de la crisis, Malasia sólo experimentó dos incidentes de confrontación étnica menos graves (en Kampung Rawa y Penang, en abril de 1998, y en Kampung Medan y Kuala Lumpur en marzo de 2001). Éstos cobraron pocas víctimas, se controlaron rápidamente y, lo que es más importante, estuvieron libres de la tensión entre malasios y chinos, que es la fuente de conflicto étnico potencialmente más desestabilizadora en Malasia. Sorprendentemente, en el movimiento Reformasi que surgió tras la destitución y acusación del ex vice primer ministro malasio Anwar Ibrahim, en septiembre de 1998, se constituyó un Frente Alternativo (como oposición al Frente Nacional en el poder) integra-

do por una coalición multiétnica de partidos con diversas asociaciones étnicas, afiliaciones religiosas y compromisos ideológicos.

En resumen, resulta irónico que Indonesia, considerada normalmente libre de problemas étnicos inextricables, fuera objeto de una terrible violencia étnica, mientras que Malasia, por lo general descrita como “una sociedad multiétnica profundamente dividida”, experimentara unas relaciones étnicas estables, si no mejores. Este contraste indujo a políticos y analistas en Indonesia y Malasia a argumentar que, posteriormente a la crisis, Malasia pudo evitar el conflicto étnico gracias a su Nueva Política Económica (NPE) de acción afirmativa, entrada en vigor en 1970. Al extrapolar, algunos observadores se han interesado por la NPE como instrumento para manejar las tensiones étnicas en Indonesia y en otros lugares.

La idea de la replicabilidad de la NPE como política pública es de por sí intrigante. No obstante, para evaluar apropiadamente la NPE con el objetivo de valorar su utilidad como modelo para adopción, no podemos abstraerla del contexto histórico en que se ideó, se aplicó y se suspendió en una ocasión. Existen razones de peso para tomar estas precauciones. La NPE se promulgó tras los primeros brotes de violencia étnica en Kuala Lumpur, el 13 de mayo de 1969. Sin embargo, era esencialmente una declaración visionaria de objetivos—en particular “erradicar la pobreza con independencia de la raza” y “proceder a una reestructuración para abolir la identificación de la raza con la función económica” a los fines de lograr una “unidad nacional”. Los programas de

acción afirmativa adoptados posteriormente en nombre de la NPE a menudo eran cuestiones de controversia política, intervención estatal e invención burocrática. Su retórica se regía por el origen étnico, pero la NPE fue en última instancia un proyecto masivo de ingeniería social que recompuso la sociedad y la estructura de clases de Malasia, lo que en ciertas ocasiones tuvo consecuencias inesperadas. De hecho, la NPE llegó a considerarse un proyecto estatal que redefinía el concepto de nación, cambiaba el equilibrio de poderes económicos y políticos, creaba capacidades tecnocráticas para la intervención económica, modificaba las formas de gobierno y promovía una ideología de desarrollo.

Sin embargo, no debería exagerarse el éxito de la NPE. De 1970 a 1990, la “política de la NPE” cautivó a la sociedad malasia, aunque más que disminuirla, aumentaba la recriminación interétnica. Sólo a mediados del decenio de 1990, cuando Malasia había alcanzado niveles de prosperidad sin precedentes, no directamente atribuibles a la acción afirmativa, se desarrolló un sentimiento de objetivo nacional más fuerte que la rivalidad interétnica. Pero ya que la NPE tocó la “esencia económica” de los problemas étnicos en Malasia, quizá sea necesario reconsiderar las siguientes enseñanzas que pueden adquirirse de la NPE:

- En primer lugar, las reformas socioeconómicas de la NPE exigieron un alto grado de intervención económica. Los regímenes sucesivos posteriores a 1969 “gobernaron el mercado” y brindaron oportunidades a la comunidad malasia, regularon

las empresas e invirtieron en sectores fundamentales.

- En segundo lugar, los artífices de la NPE trataron de destruir simultáneamente las barreras étnicas y de clases que dividían a la sociedad malasia. La NPE ofreció soluciones a los problemas étnicos, pero su dinámica de clases era igualmente importante. Para transformar la sociedad y la estructura de clases de Malasia se combinaron varias políticas, a saber, llevar a cabo una reestructuración para apoyar a los capitalistas, las clases profesionales y medias de Malasia; iniciar programas de repoblación de tierras para aliviar la pobreza rural; y atraer a empresas multinacionales para que generaran empleo industrial.
- En tercer lugar, se redefinieron los parámetros de la nación y la nacionalidad para consolidar el dominio político malasio frente a la población no malasia, y para establecer una cultura nacional malasio-musulmana. Estos parámetros dieron lugar a que las identidades y culturas no malasias fueran objeto de un “rechazo benigno”, pero no eliminaron la infraestructura económica y social de las comunidades no malasias.
- En cuarto lugar, el nacionalismo económico de la NPE adoptó diferentes formas y se practicó en diferentes grados. Si bien la NPE redujo una forma más antigua de propiedad extranjera—en beneficio del capital nacional—favoreció la inversión extranjera directa en el sector industrial que apoyaría la industrialización orientada a la exportación. La reestructuración empresarial fue una expresión del nacionalismo

económico malasio frente al capital no malasio, pero aisló a las pequeñas y medianas empresas chinas. En un momento oportuno, la postura del primer ministro Mahathir Mohamad con respecto a “Malaysia Inc.” volvió a interpretar la NPE para expresar una visión de “capital nacional” multiétnico capaz de conducir a una nación unificada.

- En quinto lugar, el Frente Nacional en el poder mantuvo formas institucionalizadas de reparto interétnico de poder. Los partidos no malasios que lo integraban eran representantes reales, si bien limitados, de “sus” comunidades. El reparto de poder fue factible porque la divisibilidad étnica de Malasia se limitó fundamentalmente a las diferencias entre malasios y chinos.
- En sexto lugar, los regímenes sucesivos mantuvieron la premisa de la NPE de promover un alto nivel de crecimiento para facilitar la redistribución, sin ejercer una presión excesiva sobre las relaciones étnicas. Durante una recesión a mediados del decenio de 1980, el régimen de Mahathir suspendió temporalmente la reestructuración a favor del crecimiento.
- En séptimo lugar, las condiciones en continua evolución afectaron de diversas formas los resultados de la NPE, pero el Estado aprendió a hacer frente a los efectos desestabilizadores de las crisis económicas y a aprovechar las condiciones favorables. El auge de los precios del petróleo y de los productos en el decenio de 1970 impulsó la reestructuración. Su caída repentina condujo a la suspensión de la

NPE en 1986. Los cambios en el sistema industrial mundial atrajeron la inversión extranjera directa para el sector manufacturero en los años 70 y nuevamente más tarde, a finales de los años 80.

Para estudiar la situación en Indonesia, o de cualquier otra sociedad azotada por las tensiones étnicas, desde la perspectiva de la NPE, es necesario mantener un equilibrio realista entre “contrastes y obstáculos” y “similitudes y oportunidades”. La transformación socioeconómica de la NPE no es una labor que el país puede realizar fácilmente por sí solo para solucionar el problema del deterioro étnico—en particular cuando, para la mayoría de los Estados, las circunstancias mundiales dificultan practicar el grado de nacionalismo económico que llevó a la práctica Malasia al intervenir en la economía, imponer un programa de reformas al capital extranjero y local, utilizar la “nueva división del trabajo internacional” emergente para acabar con la división étnica laboral, y apoyar a las empresas estatales. En la medida en que las relaciones étnicas están integradas en la política económica, la sociedad y la cultura, la cuestión crítica que se plantea no es si Indonesia necesita aplicar con posterioridad a la crisis una NPE similar a la de Malasia para solucionar sus complejos y graves problemas étnicos, sino más bien si el movimiento Reformasi “reestructurará” la economía política de Indonesia al objeto de erradicar verdaderamente la pobreza para la gran mayoría.

Khoo Boo Teik es Profesor Asociado y Subdirector de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Sains de Malasia.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

La lucha contra el racismo ambiental a escala mundial en el siglo XXI

Robert D. Bullard

En tan sólo dos décadas, el movimiento de justicia ambiental, originario de los Estados Unidos, se ha extendido por todo el mundo: se ha hecho un llamamiento a la justicia ambiental desde el Centro Sur de los Ángeles hasta el Sur de Durban. Este movimiento popular responde en gran parte al racismo ambiental—cualquier política, práctica o directiva que afecta o perjudica de formas diferentes (voluntaria o involuntariamente) a personas, grupos o comunidades por motivos de raza o de color. Por ejemplo, el saturnismo es una enfermedad (evitable) que afecta de manera desproporcionada a niños afroamericanos. Más del 28.4 por ciento de niños afroamericanos de familias de bajos ingresos padece de saturnismo, en comparación con el 9.8 por ciento de los niños blancos de familias de bajos ingresos.

Los efectos de la mundialización

La mundialización creciente de la economía mundial ha ejercido particular presión sobre los ecosistemas de muchas comunidades y países pobres habitados en gran parte por personas de color y pueblos indígenas. Pueden facilitarse numerosos ejemplos sobre el modo en que esto está sucediendo.

La mundialización facilita la fuga de capital y de las empresas multinacionales hacia zonas donde la regulación ambiental es más débil, los incentivos fiscales más numerosos, las oportunidades de obtener beneficios mayores, y la mano de obra más barata. Las industrias de extracción de recursos, como las del petróleo, la madera y los minerales, son particularmente pertinentes en este contexto.

El tráfico transfronterizo de residuos peligrosos constituye otro ejemplo de

racismo ambiental, debido a que tales flujos son generalmente de países industrializados y ricos del Norte hacia países en desarrollo del Sur. Sin embargo, en la última década numerosos países en desarrollo han desafiado la “política no escrita” de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de exportar sus residuos peligrosos a países mal equipados para su tratamiento. Como respuesta al creciente tráfico transfronterizo de residuos, la Organización de la Unidad Africana y el G-77 han adoptado la Convención de Bamako y modificado la Convención de Basilea. No obstante, aún se permite la salida de algunos cargamentos transfronterizos, así como la exportación y el comercio de pesticidas prohibidos, residuos peligrosos, productos reciclables dudosos, productos tóxicos y tecnologías “peligrosas”.

Existen más de 2,000 *maquiladoras* (fábricas de montaje) dirigidas por empresas estadounidenses, japonesas y por otras firmas extranjeras, ubicadas a lo largo del Valle Bajo del Río Grande, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Estas fábricas utilizan mano de obra mexicana barata para ensamblar partes importadas y procesar materias primas, y enviar posteriormente los productos terminados a los Estados Unidos. Vierten sus residuos tóxicos en el Río Grande, del que el 95 por ciento de los residentes de la región obtienen su agua para beber. La desconsideración de las fábricas tanto por el medio ambiente como por la seguridad pública ha puesto en peligro la salud de los residentes fronterizos y el entorno físico.

Los trabajadores de color son especialmente vulnerables al chantaje econó-

mico debido a la amenaza del desempleo y a su concentración en ocupaciones mal remuneradas, no especializadas, peligrosas y donde carecen de representación sindical. En los Estados Unidos, más del 80 por ciento de los trabajadores agrícolas migrantes son hispanos—de los cuales, entre 3 y 5 millones realizan trabajos duros a cambio de salarios bajos y en condiciones inseguras, insalubres e injustas. La incidencia de daños causados por los productos químicos es mucho mayor entre los trabajadores agrícolas que entre los demás trabajadores en los Estados Unidos, y los niños son los migrantes más vulnerables. Más del 50 por ciento de todos los niños migrantes ha trabajado en campos aún mojados por los pesticidas, y más de un tercio ha sido rociado directamente. En los Estados Unidos, cada año emigran aproximadamente 250,000 hijos de trabajadores agrícolas, 90,000 de ellos a través de una frontera internacional. Cerca del 73 por ciento de los niños migrantes carecen de seguro de enfermedad.

La subvención de empresas contaminantes en Estados Unidos

El sur de Estados Unidos se convirtió en una “zona de sacrificio”, un pozo negro para los residuos tóxicos del país. Además, esta región (el Sur Profundo) se caracteriza por un singular legado de esclavitud, de segregación racial y de resistencia blanca a la justicia igual para todos. Un efecto duradero de esta situación es que se trata de la región ecológicamente más sucia de los Estados Unidos.¹ Numerosas comunidades afroamericanas (muchas fundadas por antiguos esclavos) situadas a lo largo del Corredor Industrial del Bajo Mississippi en Luisiana están afectadas por la contaminación industrial. En este corredor se han establecido

más de 125 empresas que fabrican diversos productos, desde fertilizantes, a gasolina, pintura y plástico. Los ecologistas y residentes locales lo han apodado “el Callejón del Cáncer”.

Las fábricas contaminan rutinariamente el aire, el suelo y el agua para consumo humano, al tiempo que gozan de deducciones fiscales. Los ciudadanos de Luisiana subvencionan la protección a las empresas con su salud y su ambiente. Sin embargo, los subsidios fiscales de que gozan las empresas contaminantes han creado un puñado de empleos con un coste muy elevado. En el decenio de 1990, Luisiana canceló 3,100 millones de dólares de impuestos sobre propiedades de empresas contaminantes. Las cinco compañías que más contaminan en el Estado han recibido durante la última década 111 millones de dólares en deducciones fiscales.

El colonialismo radioactivo y los residuos tóxicos de las fuerzas militares

El colonialismo radiactivo tiene lugar al producirse energía (la minería del uranio) y al verse residuos en las tierras de los pueblos nativos e indígenas. El ejército estadounidense ha dejado una estela tóxica de armas nucleares en estas tierras, desde Nevada hasta las Islas del Pacífico. Por ejemplo, las 1,000 bombas atómicas que se explosionaron en las tierras de los shoshone occidentales convierte al país en “la nación más bombardeada de la tierra”. El gobierno de los Estados Unidos ha propuesto la construcción de un vertedero de residuos nucleares en la Yuca Mountain, tierra sagrada para los shoshone. Los pueblos nativos de Alaska y sus tierras utilizadas tradicionalmente para la caza y la pesca también corren peligro por la contaminación de las bases militares. Los residentes de Vieques en Puerto Rico—la pequeña isla asociada al Commonwealth con los Estados Unidos, con una población de 9,000

habitantes—participan activamente en una férrea lucha para echar de sus tierras a la Marina de los Estados Unidos, que ha utilizado la isla como campo de tiro desde 1941. Además, los residentes de las Islas Marshall viven con el triste legado de una contaminación radioactiva debido a la prueba de armas de las fuerzas militares de Estados Unidos.

El movimiento popular mundial

A raíz de los peligros ambientales a que se enfrentan, las personas de color de los países industrializados tienen mucho en común con las poblaciones de los países en desarrollo del Sur. El cambio climático mundial es representativo del dilema ambiental. La elevación del nivel del mar puede obligar a los residentes de las Islas Marshall a abandonar sus tierras. El deshielo de los glaciares, el cambio de la fauna y la disminución del grosor del hielo están desestabilizando los medios de vida tradicionales de los habitantes del Círculo Polar Ártico. Están constituyéndose alianzas mundiales de víctimas de este tipo de racismo ambiental, que exigen “justicia climática”.² De igual modo, grupos populares de Luisiana, el Delta del Níger, Ecuador y Colombia han identificado a las grandes compañías petroleras como una amenaza ambiental. Estos grupos se han organizado, educado y capacitado a sí mismos para desafiar a los agentes contaminantes gubernamentales e industriales que transforman sus comunidades en zonas de residuos tóxicos. También han conseguido llevar su mensaje y su lucha al ámbito internacional, incluida la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo.

Los residuos peligrosos y las industrias “sucias” han seguido el camino más fácil. Se ha ofrecido a los pueblos y las comunidades pobres una alternativa

falsa: “si no hay trabajo no hay desarrollo” contra “trabajos peligrosos y mal remunerados y contaminación”. Es evidente que el mecanismo de protección del medio ambiente ya no funciona y que debe repararse. El movimiento de justicia social tiene objetivos bien definidos para eliminar el desigual cumplimiento de las leyes sobre el medio ambiente, los derechos civiles y la salud pública. El movimiento ha cambiado las vidas de las personas y el entorno físico, al ayudar a las autoridades políticas a identificar poblaciones “en riesgo”, zonas tóxicas y lagunas en la investigación, así como a desarrollar modelos de acción con miras a corregir los desequilibrios actuales y a impedir amenazas futuras. El siglo XXI presenta tanto viejos como nuevos desafíos, y debe hacerse frente a todos ellos si nos proponemos lograr una sociedad mundial justa y sostenible para todos.

Robert D. Bullard es Director del Environmental Justice Resource Center en la Universidad de Atlanta, Atlanta, Georgia. Es autor de *Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots* (South End Press, 1996).

Para más información sobre el racismo ecológico, consulte el sitio Web del Environmental Justice Resource Center, www.ejrc.cau.edu.

¹ Véase *Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality*, Robert D. Bullard, Westview Press, Boulder, Colorado, 2000.

² Véase *People of Color Environmental Groups Directory*, Robert D. Bullard, Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Michigan, 2000.

El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

Whose Land? Civil Society Perspectives on Land Reform and Rural Poverty Reduction: Regional Experiences from Africa, Asia and Latin America

editado por Krishna B. Ghimire, con la contribución del editor Bruce H. Moore

Contenido: Prólogo • Introducción: Capacitar a los pobres de las zonas rurales a través de la reforma agraria y el acceso mejorado a los bienes productivos • Perspectivas regionales sobre la reforma agraria: Considerar la función de las organizaciones de la sociedad civil • Las reformas agrarias en Asia Sudoriental: El papel de las ONG y otros agentes • La experiencia de Asia Meridional respecto de la reforma agraria: Las ONG, el Estado y los donantes • Perspectivas para la reforma agraria y los movimientos de la sociedad civil en el Cercano Oriente y el Norte de África • El destino de la reforma agraria en África Meridional: El papel del Estado, el mercado y la sociedad civil • Reformas a la tenencia de la tierra en África Occidental y Central: Legislación, polémica y movimientos sociales • Visión general de las reformas agrarias y las organizaciones de campesinos en América Central • Cuestiones e iniciativas relativas a la reforma agraria en tres países andinos de Sudamérica

Krishna B. Ghimire es Coordinador de Investigación en UNRISD; **Bruce H. Moore** es Coordinador de la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza.

Whose Land? es una copublicación de la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola; edición rústica, ISBN 92-9072-012-3, 253 páginas, 2001, \$25. ① Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza, c/o FIDA, via del Serafico 107, 00142 Roma, Italia; tel. +39 06 5459 2445, fax +39 06 504 3463, coalition@ifad.org, www.ifad.org.

Shifting Burdens: Gender and Agrarian Change under Neoliberalism

editado por Shahra Razavi

Contenido: Introducción • La distinción por género y la expansión de la exportación de productos agrícolas no tradicionales en Uganda • La reforma agraria y la capacitación de las mujeres rurales en la Sudáfrica posterior al apartheid • Las mujeres trabajadoras en los mercados no tradicionales de México • Distinción por género, diversificación de los medios de vida y crecimiento en beneficio de los pobres en el Vietnam rural • Efecto de los programas microfinancieros en la pobreza y la igualdad de género: Algunas pruebas proporcionadas por ONG establecidas en la India • ¿Está cambiando el panorama? La distinción por género y el desarrollo de la participación **Shahra Razavi** es Coordinadora de Investigación en UNRISD.

Shifting Burdens es una publicación conjunta con Kumarian Press; edición rústica, ISBN 1-56549-143-2, 288 páginas, 2002, \$29.95. ① Kumarian Press, 1294 Blue Hills Avenue, Bloomfield, Connecticut 06002, Estados Unidos; tel. +1 860 243 2098, fax +1 860 243 2867, kpbooks@aol.com, www.kpbooks.com.

Ghana's Adjustment Experience: The Paradox of Reform

Eboe Hutchful

Contenido: Introducción I / La crisis económica y los antecedentes del proceso de ajuste • La gestación de la crisis: De Nkrumah a Limann • Las dimensiones sociopolíticas de la crisis • El origen del programa II / Políticas de ajuste y resultados • Política macroeconómica y resultados • Política sectorial • Reforma del sector público • Dimensiones sociales del proceso de ajuste III / Las políticas de ajuste • Dimensiones institucionales y políticas • Fuerzas sociales IV / Del ajuste a la democracia • El desafío de la liberalización política: Reestructuración del paisaje • La Cuarta República: ¿El fracaso de la política de ajuste?

Eboe Hutchful es Profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Estudios Africanos de Wayne State University, Detroit, Michigan.

Ghana's Adjustment Experience es una publicación conjunta de James Currey, Heinemann y Woeli; edición rústica, ISBN 0-85255-166-5, 268 páginas, 2002, £16.95; edición empastada, ISBN 0-85255-167-3, 268 páginas, 2002, £40. ① James Currey, 73 Botley Road, Oxford OX2 0BS, Reino Unido, www.jamescurrey.co.uk; Heinemann, 361 Hanover Street, Portsmouth, New Hampshire 03801-3912, Estados Unidos, www.heinemann.com; Woeli Publishing Services, P.O. Box NT 601, Accra New Town, Ghana, www.africanbookscollective.com.

Voluntary Approaches to Corporate Responsibility: Readings and a Resource Guide

NGLS y UNRISD

Contenido: Prólogo • Introducción • Códigos de conducta empresariales: Autorregulación y economía mundial—**Rhys Jenkins** • Regular las empresas a través de iniciativas de múltiples partes interesadas: Una evaluación preliminar—**Peter Utting** • La responsabilidad social y ambiental de las empresas, fuentes de información seleccionadas: Bibliografía y sitios Web—**Renato Alva Pino**

Rhys Jenkins es Lector de Estudios sobre Desarrollo en la Universidad de East Anglia, Reino Unido; **Peter Utting** es Coordinador de Investigación, y **Renato Alva Pino** fue Asistente de Investigación, en UNRISD.

Voluntary Approaches to Corporate Responsibility es una publicación conjunta con el NGLS y forma parte de la serie "Development Dossier"; edición rústica, 211 páginas, 2002, gratuito. ① UN-NGLS, Le Bocage, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza, o consulte el sitio Web www.unsystem.org/ngls.

The Greening of Business in Developing Countries: Rhetoric, Reality and Prospects

editado por Peter Utting

Contenido: Introducción—¿Hacia una responsabilidad ambiental de las empresas? I / **La trayectoria ambiental del sector privado** • Grandes empresas y compañías nacionales: La orientación ecológica del sector empresarial en México • Gestión ambiental como indicador de la responsabilidad empresarial en América Central • Perspectivas biológicas en Costa Rica: Hacer frente a las nuevas dimensiones de la responsabilidad social y ambiental • Los efectos ambientales y sociales de la política ecológica de las empresas en la industria de la pulpa en Brasil • Responsabilidad ambiental de las empresas en Singapur y Malasia: El potencial y los límites de las iniciativas voluntarias II / **Promover la responsabilidad ambiental de las empresas: Mecanismos y estrategias** • Un desarrollo perturbador: Polémica entre las tendencias ecológicas empresariales, el orden económico internacional y la sostenibilidad • Regulación ambiental de las empresas multinacionales: Necesidades y perspectivas • Promover la responsabilidad ambiental de las empresas: ¿Qué papel deben desempeñar los instrumentos políticos “de autorregulación” y “de corregulación” en Sudáfrica? • Nuevas alianzas para el desarrollo sostenible: El carácter evolutivo de las relaciones entre las empresas y las ONG • Hacia una regulación civil: las ONG y la política ecológica empresarial • La política ecológica empresarial en el Sur: Evaluación de límites y perspectivas **Peter Utting es Coordinador de Investigación en UNRISD.**

The Greening of Business in Developing Countries es una publicación conjunta con Zed Books; edición rústica ISBN 1-84277-089-6, 312 páginas, 2002, \$27.50; edición empastada, ISBN 1-84277-088-8, 312 páginas, 2002, \$69.95. ① Zed Books, 7 Cynthia Street, Londres N1 9JF, Reino Unido; tel. +44 (0)20 7837 4014, fax +44 (0)20 7833 3960, sales@zedbooks.demon.co.uk.

Global Media Governance: A Beginner's Guide

Seán Ó Siochrú y Bruce Girard, con la colaboración de Amy Mahan

Contenido: Prólogo • Introducción I / • Introducción a la regulación nacional de los medios de comunicación • Instituciones mundiales de gobernabilidad • Tendencias observadas en los medios de comunicación II / • La Unión Internacional de Telecomunicaciones • La Organización Mundial del Comercio y el comercio de los productos de los medios de comunicación • La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura • La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y los Derechos de Propiedad Intelectual • La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números III / • Regulación mundial de los medios de comunicación • Actores y tendencias de la gobernabilidad mundial • Perspectivas sobre la gobernabilidad de los medios de comunicación • Referencias bibliográficas seleccionadas • URL seleccionados **Seán Ó Siochrú es Director de Nexus Research en Dublín, Irlanda; Bruce Girard es mediaworker e investigador y Amy Mahan es investigadora en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos.**

Global Media Governance está publicado conjuntamente con Rowman y Littlefield; edición rústica, ISBN 0-7425-1566-4, 202 páginas, 2002, \$19.95; edición empastada, 0-7425-1565-6, 202 páginas, 2002, \$65. ① Rowman and Littlefield Publishers Inc., 4720 Boston Way, Lanham, Maryland 20706, Estados Unidos, www.rowmanlittlefield.com.

Popular Development and Democracy: Case Studies with Rural Dimensions in the Philippines, Indonesia, and Kerala

Olle Törnquist

Contenido: I / **El discurso** • Desarrollo y democracia • Argumentos principales • Propuestas alternativas • El marco analítico II / **Los casos de Filipinas, Indonesia y Kerala en un marco comparativo y teórico** • Casos, diseño y fuentes • La puesta en práctica de conceptos teóricos o los resultados contextuales esperados • Ideas frescas pero trabajo arduo en las aguas turbias de Filipinas • Opciones democráticas nuevas pero poco arraigadas en Indonesia • Esfuerzos pioneros para renovar el modelo de Kerala III / **Conclusiones: El eslabón perdido** • La democratización elitista y los nuevos esfuerzos populares • Problemas de la política popular de la democratización

Olle Törnquist es Profesor de Ciencias Políticas y Estudios sobre Desarrollo en la Universidad de Oslo, Noruega.

Popular Development and Democracy es una publicación conjunta con el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Oslo; edición rústica ISSN 0807 1195, ISBN 82-90391-43-9, 150 páginas, 2002, \$25. ① UNRISD o al Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Universidad de Oslo; P.O. Box 1116 Blindern, N-0317 Oslo, Noruega, www.sum.uio.no.

Resistiendo al olvido: Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia

Stephan Suhner

Contenido: Introducción • El movimiento social y campesino de 1980 a 1996 • La situación del movimiento campesino, afrocolombiano e indígena a partir de 1996 • Unidad y alianzas en el movimiento popular y especialmente en el movimiento campesino • Los cultivos ilícitos, la guerra contra las drogas y las marchas cocaleras de 1996 • La reforma agraria: entre la paz y la mundialización • Tres casos ejemplares: Cacarica, la CIMA y la ACVC • Conclusiones **Stephan Suhner es activista e investigador independiente.**

Resistiendo al olvido es una publicación conjunta con Taurus; edición rústica, ISBN 958-704-011-2, 199 páginas, 2002, diríjase a la editorial para informarse sobre el precio. ① Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., Calle 80, No. 10-23, Bogotá, Colombia; tel. +57 653 12 00.

Women's Employment in the Textile Manufacturing Sectors of Bangladesh and Morocco

editado por Carol Miller y Jessica Vivian

Contenido: Introducción • La discriminación salarial por distinción de género entre la fuerza laboral urbana en Marruecos: Pruebas y consecuencias para la política industrial y laboral • La distinción por género y el empleo en las industrias textiles de Marruecos • Dimensiones de distinción por género en la migración laboral en el sector manufacturero formal de la Ciudad de Dhaka • El trabajo en la industria textil: La movilización de las mujeres en las fábricas textiles de Bangladesh • Sindicatos, cuestiones relativas a la distinción por género, y la industria de la confección en Bangladesh • El empleo de las mujeres bajo el modelo de la industrialización orientada a la exportación: Perspectivas de asimilación de las oportunidades mundiales en el sector textil de Bangladesh

Carol Miller es analista de políticas relativas a las cuestiones sobre la distinción por género en ActionAid, Reino Unido. Trabajó durante algunos años como Asociada de Investigación en UNRISD. **Jessica Vivian** trabajó durante varios años como Coordinadora de Investigación en UNRISD, y actualmente está afincada en Estados Unidos, donde ejerce como asesora independiente.

① UNRISD; edición rústica, ISBN 92-9085-039-6, 264 páginas, 2002, \$25.

La mano visible: Asumir la responsabilidad por el desarrollo social

Traducción al español de **Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development**, UNRISD, 2000.

Contenido: Mundialización con una máscara humana • ¿Quién paga? Financiamiento del desarrollo social • Democracias frágiles • Una nueva misión para el sector público • Convocación a las corporaciones transnacionales para que rindan cuentas • Sociedades civiles • Lograr que el desarrollo sea adecuado para las mujeres • Sustentación del desarrollo

Comité editorial: el presente informe de UNRISD fue elaborado por Peter Utting (Coordinador de proyecto); Cynthia Hewitt de Alcántara, Yusuf Bangura, Thandika Mkandawire, Shahra Razavi, Peter Utting y David Westendorff (Coordinadores de capítulos); y Peter Stalker y Cynthia Hewitt de Alcántara (Editores principales). La traducción al español de la versión original en inglés fue realizada por Sergio Alcántara Ferrer.

① UNRISD; edición rústica, ISBN 92-9085-037-X, 188 páginas, 2001, \$25.

La mano visible también se publicó en francés y ruso (véase más abajo) en 2001; el Resumen Ejecutivo se publicó en portugués en 2002; las ediciones en chino y persa estarán disponibles en breve.

Vidimye Ruki: Otvetstvennost za sotsialnoye razvitiye

Traducción al ruso de **Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development**, UNRISD, 2000.

Contenido: Mundialización con una máscara humana • ¿Quién paga? Financiamiento del desarrollo social • Democracias frágiles • Una nueva misión para el sector público • Convocación a las corporaciones transnacionales para que rindan cuentas • Sociedades civiles • Lograr que el desarrollo sea adecuado para las mujeres • Sustentación del desarrollo

Comité editorial: el presente informe de UNRISD fue elaborado por Peter Utting (Coordinador de proyecto); Cynthia Hewitt de Alcántara, Yusuf Bangura, Thandika Mkandawire, Shahra Razavi, Peter Utting and David Westendorff (Coordinadores de capítulos); y Peter Stalker y Cynthia Hewitt de Alcántara (Editores principales). La traducción al ruso de la versión original en inglés fue realizada por Natalja Kulakova, con un prólogo de Valery Tishkov.

Vidimnie ruki es una publicación conjunta con la Academia Rusa de las Ciencias; edición rústica, ISBN 5-201-13755-5, 192 páginas, 2001, diríjase a la editorial para informarse sobre el precio. ① Instituto de Etnología y Antropología, Academia Rusa de las Ciencias, Leninskii Prospect 32-A, Moscú 117334, Federación de Rusia.

La mano visible también se publicó en francés y español (véase más arriba) en 2001; el Resumen Ejecutivo se publicó en portugués en 2002; y las ediciones en chino y persa estarán disponibles en breve.

People, Power and the Environment: 15 Years of UNRISD Research

Síntesis y bibliografía anotada preparadas para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 compiladas por Catherine Agg y Peter Utting

Contenido: Prólogo • Introducción I / **Resultados de la investigación** • Cuestiones teóricas y debates • Conexiones sociales y ambientales • Intervenciones principales para proteger el medio ambiente • La aplicación de "nuevos" conceptos • Algunas consecuencias para la política y el análisis II / **Bibliografía anotada** • Participación del público en general en la conservación y el desarrollo sostenible • Población, género y medio ambiente • Dinámica social de la deforestación • Dimensiones sociales y ambientales de las zonas protegidas y el turismo • Responsabilidad empresarial para el desarrollo sostenible • Otras publicaciones **Anexo 1** / Proyectos de UNRISD sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible **Anexo 2** / Principales estudios de caso por países **Anexo 3** / Autores y editores **Anexo 4** / Colaboradores de los volúmenes editados

Peter Utting es Coordinador de Investigación, y **Catherine Agg** es Asistente de Investigación, en UNRISD.

① UNRISD; edición rústica, ISBN 92-9085-042-6, 60 páginas, 2002, gratuito.

* **Documento del programa sobre sociedad civil y movimientos sociales**

- PP CSSM 5 **The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey**, *Nadje S. Al-Ali*, abril de 2002

* **Documentos del programa sobre democracia, gobernabilidad y derechos humanos**

- PP DGHR 5 **Human Rights and Social Development: Toward Democratization and Social Justice**, *Yash Ghai*, octubre de 2001
- PP DGHR 6 **Gender of Democracy: The Encounter between Feminism and Reformism in Contemporary Iran**, *Parvin Paidar*, octubre de 2001
- PP DGHR 7 **Multiculturalism, Universalism and the Claims of Democracy**, *Anne Phillips*, diciembre de 2001

* **Documentos del programa sobre política social y desarrollo**

- PP SPD 9 **Gender and Education: A Review of Directions for Social Policy**, *Ramya Subrahmanian*, abril de 2002
- PP SPD 10 **Agrarian Change, Gender and Land Reform: A South African Case Study**, *Cherryl Walker*, abril de 2002
- PP SPD 11 **Agrarian Reform, Gender and Land Rights in Uzbekistan**, *Deniz Kandiyoti*, junio de 2002

- PP SPD 12 **Women's Employment and Welfare Regimes: Globalization, Export Orientation and Social Policy in Europe and North America**, *Ann Shola Orloff*, junio de 2002

* **Documentos del programa sobre tecnología, empresas y sociedad**

- PP TBS 5 **Regulating Large International Firms**, *E.V.K. FitzGerald*, noviembre de 2001
- PP TBS 6 **Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation?**, *Melody Kemp*, diciembre de 2001

▪ **UNRISD Conference News**

- CN 7 **Promoting Socially Responsible Business in Developing Countries: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives**, Informe sobre el taller organizado por UNRISD en Ginebra, Suiza, 23–24 de octubre de 2000
- CN 8 **Les technologies de l'information et de la communication et le développement social au Sénégal**, Informe sobre la reunión organizada por UNRISD en Dakar, Senegal, 16–17 de julio de 2001
- CN 9 **Racism and Public Policy**, Informe de la conferencia internacional de UNRISD en Durban, Sudáfrica, 3–4 de septiembre de 2001

* \$8 cada uno para los lectores del Norte; \$4 cada uno para los lectores del Sur. ▪ Gratuito.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Para pedir las publicaciones conjuntas: Diríjase a la editorial respectiva.

Para pedir publicaciones internas: Diríjase al Centro de Información de UNRISD, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza; tel. +41(0)22 9173020; fax +41(0)22 9170650; info@unrisd.org; www.unrisd.org.

Formas de pago para las publicaciones internas: Mediante un cheque en dólares de los Estados Unidos girado con cargo a un banco de EEUU, o mediante una transferencia bancaria en dólares de los Estados Unidos o su equivalente en francos suizos.

No se aceptan tarjetas de crédito.

¡Nuevo y mejorado! UNRISD rediseña su sitio Web

El 24 de junio de 2002, después de más de un año de trabajo, UNRISD lanzó su totalmente nuevo sitio Web (www.unrisd.org). El nuevo diseño se emprendió para mejorar la experiencia de los visitantes del sitio y satisfacer plenamente su necesidad de obtener información de gran calidad sobre cuestiones claves relativas al desarrollo social.

Servir a un público amplio

El nuevo sitio proporciona información precisa y actualizada sobre proyectos, eventos, publicaciones y noticias de UNRISD. Nos hemos propuesto crear un sitio que permita a los visitantes buscar la información que les interesa en el menor tiempo posible, alentándoles igualmente a navegar por el mismo y a descubrir aspectos desconocidos de la labor de UNRISD. Hemos puesto referencias cruzadas a toda la información del nuevo sitio, lo que aumenta las posibilidades de investigación, al ofrecer numerosos enlaces entre ámbitos conexos del trabajo realizado por el Instituto tanto en el pasado como en el presente.

El nuevo sitio también apoya los esfuerzos realizados por UNRISD para cumplir su mandato, lo cual implica que brindamos a la comunidad académica, a los responsables de la formulación de políticas en los planos internacional, regional, nacional y local; al sector no gubernamental y a los medios de difusión, los resultados y análisis de las investigaciones, para ayudarles a comprender el modo en que las políticas de desarrollo y los procesos del cambio económico, social y ambiental afectan a los diferentes grupos sociales.

Más orientado al usuario

Al rediseñar el sitio, nos esforzamos por simplificar al máximo su utilización. La nueva estructura presenta la extensa labor desplegada por UNRISD, al mis-

mo tiempo que permite una navegación sencilla e intuitiva. Dado que muchos de nuestros visitantes no tienen acceso a ordenadores de alta gama o a conexiones de telecomunicaciones fiables, el diseño del sitio es simple y directo. Gracias a una información organizada jerárquicamente y a una navegación sistemática, los usuarios pueden navegar por el nuevo sitio con facilidad.

Contenido

Las principales secciones del nuevo sitio son: Acerca de UNRISD • Investigación • Publicaciones • Actualidades & Perspectivas • Eventos • Enlaces

Para garantizar la difusión puntual de los resultados de las investigaciones de UNRISD, se incorporan al sitio Web numerosos documentos no publicados, que se encuentran en la sección de Investigación, con enlace a través del proyecto pertinente.

Además de estas tres áreas de contenido, se ofrecen los siguientes servicios: Buscar • Alertas e-mail • Denos su opinión y foro de discusión • Ayuda y preguntas frecuentes • English/Français/Español (selector de idiomas)

Opciones para tener

acceso a documentos largos

La accesibilidad del contenido es un aspecto importante que facilita la utilización—especialmente en un sitio que contiene numerosos documentos íntegros y que está orientado a todos los usuarios del mundo. El nuevo sitio de UNRISD ofrece tres opciones para tener acceso a la mayoría de los textos íntegros, ya sean publicaciones formales del Instituto o proyectos de documentos de investigación. Los usuarios pueden elegir la opción que más les convenga, por ejemplo: visualizar un documento en la pantalla, descargarlo o abrir una versión en PDF, o recibir un e-mail con un anexo en PDF.

Alertas e-mail

El nuevo sitio ofrece un servicio de suscripción sofisticado, que permite a los usuarios crear o modificar su perfil, de conformidad con la frecuencia y el contenido de las alertas de actualización que deseen recibir. Los usuarios pueden elegir recibir las alertas e-mail diaria, semanal o mensualmente, y especificar sus ámbitos de interés—por ejemplo, “investigación”, “eventos”, “publicaciones”—o pedir que se les envíen actualizaciones de todas las secciones del sitio.

Invitación a formular

opiniones y foro de discusión

Se exhorta a los usuarios a visitar la sección “Denos su opinión” y a cumplimentar la breve encuesta en línea para dar a conocer a UNRISD su opinión sobre el nuevo sitio. En breve se ofrecerá el servicio de “Foro de discusión” moderado. Este es un espacio donde los Coordinadores de Investigación de UNRISD pueden dialogar con los usuarios del sitio sobre diversos aspectos de las actividades del Instituto.

Desde el principio

El proyecto de rediseño comenzó a principios de 2001, con una investigación sobre cómo UNRISD podría reestructurar y rediseñar su sitio Web para reflejar las tendencias actuales en cuanto a facilidad de manejo y mayor orientación al usuario. Este ejercicio orientado a recabar información fue realizado entre enero y mayo de 2001 por Jenifer Freedman (editora de UNRISD y coordinadora del proyecto de rediseño del sitio Web) y Tony Formoso (que entonces trabajaba como asesor técnico informático en UNRISD), a través de consultas directas a los usuarios, el personal de UNRISD y profesionales externos. Se recabaron propuestas detalladas con miras a examinar exhaustivamente la presentación y el atractivo del sitio, así como su estructura y mantenimiento.

En junio de 2001, UNRISD presentó especificaciones detalladas a la Sección de Adquisición de Naciones Unidas, que a su vez envió una solicitud formal de propuestas a 15 empresas. En julio y agosto, Freedman y Formoso realizaron una evaluación técnica de siete propuestas y documentos de licitación recibidos y, en septiembre, el contrato se otorgó a Blue Sky Communications Limited, con sede en Londres. Otra

empresa, Blue Ice Web Technology, establecida en Cheltenham (Reino Unido), colaboró en un aspecto del rediseño del sitio. La construcción real del sitio comenzó en octubre de 2001 y el nuevo sitio www.unrisd.org apareció en junio de 2002.

UNRISD se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sitio Web, un escaparate de la producción intelectual,

actividades y publicaciones del Instituto. Se invita a los lectores de **UNRISD Informa** a consultar el sitio www.unrisd.org para obtener información más completa y puntual sobre toda la labor que el Instituto realiza. Confiamos en que el nuevo sitio responda a las expectativas de los usuarios y en que pueda seguir desarrollándose como fuente de información valiosa para la comunidad del desarrollo social.

La economía política del desarrollo sostenible: Conflicto, participación y movimientos ambientales

30 de agosto de 2002, Johannesburgo, Sudáfrica

UNRISD y la Universidad de Witwatersrand patrocinaron una conferencia sobre conflictos y movimientos ambientales en el Norte y el Sur, que se celebró conjuntamente con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

En su discurso de apertura, Juan Martínez-Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, consideró “el ecologismo de los pobres”—un ecologismo de justicia y de subsistencia, relacionado no sólo con la seguridad económica en el mercado, sino también con el acceso a recursos ambientales y servicios fuera del mismo. El autor describió un gran número de grupos que participan activamente en campañas de justicia ambiental en entornos locales, y señaló que éstos están uniéndose gradualmente a un movimiento mundial a través de redes internacionales orientadas al problema. Muchos conflictos entre empresas y grupos locales interesados en el sector del combustible fósil y de la minería, o relacionados con las plantaciones de árboles, por ejemplo, han dado lugar a la aparición de redes que exigen que las empresas rindan cuentas. De manera similar, al percibir la injusticia de las normas del régimen comercial internacional, se ha consti-

tuido un movimiento social para luchar por un “comercio justo”. Via Campesina (www.viacampesina.org) está impulsando un nuevo programa agrario mundial y OilWatch (www.oilwatch.org.ec), que es contraria a la extracción de petróleo en zonas frágiles, está creando vínculos con iniciativas para luchar contra la injusticia de las políticas actuales relativas al cambio climático.

En sus observaciones sobre la conferencia, Krishna Ghimire, Coordinador de Investigación de UNRISD, expresó su preocupación por lo que realmente supone la “movilización popular” y cómo puede ser apoyada en contextos concretos. Señaló que el papel que desempeña esta movilización en la reducción de la pobreza rural al llevar a cabo reformas de los derechos agrarios y mejorar los sistemas de gestión territorial, ha sido reconocido a nivel internacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha demostrado que cambiar las estructuras de poder predominantes para facilitar una subsistencia remunerada y aumentar la influencia política de los grupos sociales rurales más débiles y pobres, es una tarea extremadamente compleja. Según Ghimire, la insistencia en los mecanismos de mercado y la falta de determinación para alienar los pode-

rosos intereses comerciales, a menudo significa que las medidas políticas tienden a desarrollarse en torno a programas y proyectos de desarrollo agrícola y rural no polémicos desde el punto de vista político.

En los últimos años, el discurso dominante sobre la conservación y el desarrollo ha adquirido un matiz progresivo—en algunos casos hasta radical—con la incorporación de términos como “empoderamiento”, “rendición de cuentas” y “estrategias centradas en las personas”. Esto no sólo se aplica a las agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG), sino también a las empresas multinacionales. Las grandes empresas se identifican cada vez más con causas sociales y ambientales, y promueven la idea de “ciudadanía corporativa”, que implica un cierto equilibrio de derechos y responsabilidades. En su presentación, Peter Utting, Coordinador de Investigación de UNRISD, analizó los movimientos que están surgiendo en torno a cuestiones relativas a la responsabilidad social y ambiental de las empresas y señaló la existencia de dos tendencias claras: por una parte, grandes empresas que actúan bajo la presión social, tenden-

cia a la que se ha llamado también “movimiento de responsabilidad empresarial”; y, por otra, grandes empresas que constituyen por iniciativa propia un movimiento para influir y controlar el programa del cambio. Utting sostiene que tanto los “movimientos” activistas como empresariales necesitan mostrar más sensibilidad acerca de las preocupaciones y la situación real de los países en desarrollo. También señala que los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas deberían considerar seriamente los llamamientos de algunos sectores de la sociedad civil para que la cuestión de la regulación empresarial se incluya definitivamente en la agenda para el desarrollo internacional.

En su presentación, María Pilar García-Guadilla, de la Universidad Simón Bolívar, evaluó el relativamente poco interés y apoyo que gobiernos, ONG y movimientos sociales de Latinoamérica han mostrado para la “Agenda 21”. A su juicio, esto obedecía, por una parte, a que se había esperado que la consolidación de la democracia en casi todos los países de la región sirviera como mecanismo para llegar a un consenso sobre la distribución de la riqueza y los escasos recursos. También puso énfasis en la crítica, hecha tanto por los gobiernos como por los movimientos sociales, sobre el “discurso oficial” de la “Agenda 21”, tal como había sido adoptado por países industrializados. Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, las principales preocupaciones de la región desde 1992 han sido el desarrollo económico y social, la estabilidad política y la consecución de gobiernos democráticos; no el desarrollo sostenible. Señaló que la considerable divergencia de perspectivas que existe actualmente, implica la necesidad de una participación mayor y más efectiva de la sociedad civil, en los procesos de formulación de políticas; lo que sólo puede lograrse si los movimientos sociales son capaces de aumentar su poder de negociación.

Cyril Obi, del Instituto Nigeriano de Asuntos Internacionales, realizó un análisis crítico de los movimientos ambientales en el África Subsahariana, señalando que, en esta zona, las luchas por el poder sobre los recursos ambientales se habían enlazado con otras luchas sociales más amplias por el empoderamiento popular y la democracia. Obi mostró cómo dos movimientos destacados—el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni en el Delta del Níger en Nigeria, y el Movimiento Cinturón Verde de Kenya—habían combinado la movilización local efectiva y el apoyo internacional mantenido, obteniendo un éxito parcial al resistir más expropiaciones en su espacio ambiental, mientras que llevaban su causa a niveles centrales en la lucha por la democracia. En efecto, en el África Subsahariana existe una corriente de movilización social que está desafiando las dominantes relaciones de poder sobre el ecosistema, en particular el monopolio del Estado sobre los recursos ambientales y el interés externo por la extracción, así como algunas formas de acumulación global que despojan de sus bienes a las personas y degradan el ambiente. Según Obi, los movimientos populares a los cuales el Estado y el capital mundial se enfrentan diariamente provocarán, en última instancia, la aparición de programas sociales y democráticos alternativos—ecológicamente sostenibles, que garanticen a las personas el derecho de ejercer un poder real sobre los ecosistemas de África.

Por último, David Fig, de la Universidad de Witwatersrand, examinó la formulación de la política ambiental en la Sudáfrica democrática. Fig explicó que el final del *apartheid* había brindado una oportunidad de establecer una nueva política ambiental que pudiera subsanar las injusticias ambientales cometidas en el pasado, regular la industria de una forma más seria en un esfuerzo por mejorar la gestión ambiental, y establecer una cultura de

derechos humanos que contemplara igualmente los derechos ambientales de los ciudadanos tanto en la legislación como en la práctica. Fig describió en particular el enfoque realizado por los grupos interesados, sobre la formulación de políticas, que culminó en la Ley Ambiental Nacional de 1997; y analizó el porqué de lo moderadamente logrado en términos de aplicación concreta. En primer lugar, el Estado ha acabado reflejando una ética en beneficio de las empresas, poniendo énfasis en la “modernización”, los grandes proyectos industriales y de alta tecnología, y la agricultura de alto rendimiento; lo que se contrapone a la necesidad real de establecer un nuevo sistema de valores vinculado a los objetivos de un desarrollo equitativo y sostenible, basado en la construcción de la prosperidad desde abajo. En segundo lugar, los movimientos ambientales de la sociedad civil se han debilitado. Por último, el sector empresarial ha recuperado la posición hegemónica que ocupó durante el *apartheid*, consolidado su posición ideológica sobre cuestiones ambientales, y logrado influir considerablemente en la formulación de políticas.

Los documentos en que se basaron las presentaciones de la conferencia se publicarán como Documentos del programa de UNRISD.

Mejorando el conocimiento sobre el desarrollo social en las organizaciones internacionales: Segundo retiro anual

29–30 de mayo de 2002, Prangins, Suiza

Una forma de mejorar el flujo de información entre los funcionarios de las Naciones Unidas interesados en la investigación para el desarrollo social es reunirlos ocasionalmente en un entorno informal, donde puedan discutir cuestiones fundamentales relativas al desarrollo mundial fuera del contexto de las reuniones formales interagenciales. Doce organizaciones pertinentes estuvieron representadas a tal efecto, en el segundo retiro anual organizado por UNRISD para tal efecto. A largo plazo, estos retiros deberían contribuir a mejorar la coherencia de las Naciones Unidas con respecto al desarrollo social, y a reforzar la capacidad colectiva de su sistema para influir en la agenda social y económica global.

El tema de la reunión de este año fue la mundialización y la desigualdad, y el seminario se estructuró con miras a los debates. Cuatro expertos no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas presentaron documentos que UNRISD les había encomendado sobre este tema. El primero analizó los modelos cambiantes de distribución de recursos en el sistema mundial, el segundo exploró los orígenes de la mundialización neoliberal, y los otros dos revisaron diferentes estrategias para el análisis de la mundialización, la liberalización y la desigualdad dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.

Análisis de la desigualdad:

Los modelos cambiantes de distribución de recursos

John Quiggin, de la Universidad Nacional de Australia, comenzó la primera sesión con un examen de la mundialización desde una perspectiva histórica. Comparó la explicación neoliberal de la mundialización con: (i) la “opinión escéptica”, que no sólo pone en duda la trascendencia de la mundialización, sino que también sostiene que la liberaliza-

ción financiera ha sido desestabilizadora; (ii) la teoría antimundialización, que afirma que la mundialización es perjudicial, y (iii) la perspectiva internacionalista, basada en la postura neoliberal de que los flujos internacionales de productos, servicios y capitales son benéficos, y que éstos deberían complementarse con el movimiento de la fuerza laboral y la colaboración entre instituciones públicas, sindicatos y ONG, con miras a una cooperación internacional consciente.

En su presentación, Quiggin también cuestionó la hipótesis de que los avances tecnológicos de finales del siglo XX hubieran impulsado el proceso de mundialización. Otros participantes debatieron esta postura, al discutir si el vínculo entre la tecnología y la creciente desigualdad mundial en los últimos 20 años era diferente de lo que había ocurrido anteriormente en épocas de cambios acelerados. Sin embargo, los participantes convinieron en que los avances tecnológicos no hacen inevitable la mundialización *neoliberal*. En efecto, la naturaleza de bien público de la información plasmada en muchos avances tecnológicos parecería apoyar un desarrollo más internacionalista y cooperativo, y dar lugar a un programa económico y social más progresista.

Los orígenes de la mundialización neoliberal

Esta discusión se basó en un documento y una presentación de Jan Aart Scholte, de la Universidad de Warwick, que sostiene que la mundialización contemporánea ha sido dominada por una política neoliberal—y que es importante examinar *por qué* ha sucedido esto. Identificó cuatro áreas de causalidad interrelacionadas: la gobernabilidad, la producción, los conocimientos y la comunidad. En la primera sugirió que la aparición del gobierno descentralizado había sido un origen de la mundialización neoliberal, en parte a través de la liberalización, que

había debilitado el papel del Estado en el ámbito económico y había provocado el aumento de mecanismos multilaterales aislados de procesos democráticos. En segundo lugar, en lo concerniente a la producción, la privatización, la liberización y la deregulación han favorecido a los inversionistas y las empresas, cuyo objetivo es aumentar su rendimiento y sus márgenes de utilidad, y éstos han ejercido presión para el establecimiento de las mismas. En tercer lugar, el dominio de una interpretación racionalista del conocimiento ha propiciado la separación de la economía de otras ciencias sociales — y ha ganado supremacía sobre ellas. Por último, en cuarto lugar, ha surgido una clase gerencial a escala mundial, que ha creado vínculos entre intereses comerciales, organismos generadores de conocimiento e instituciones reguladoras, y ha establecido un consenso entre los mismos a favor de las políticas neoliberales. Los grupos perjudicados por la mundialización neoliberal han carecido de recursos y de imaginación política para presentar una oposición efectiva.

A raíz de la presentación de Scholte, muchos participantes insistieron en la importancia que reviste el papel del Estado. Los participantes estuvieron de acuerdo en que es necesario aclarar las responsabilidades de los gobiernos nacionales para que asuman su deber de rendir cuentas por las políticas que adoptan respecto de la mundialización y la desigualdad.

Mundialización, liberalización y desigualdad: El análisis de la ONU y de otros

En su escrito y su presentación, Roy Culpeper, del Instituto Norte-Sur, se centró en la desigualdad *intranacional*; mientras que Albert Berry, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto, insistió en que la falta de datos cuantitativos impide comprender plenamente los efectos de la mundializa-

zación neoliberal en la desigualdad de ingresos y la pobreza.

Culpeper afirmó que la mundialización posiblemente no sea el único factor responsable de la tendencia hacia el incremento de la desigualdad observada en los países. Los factores nacionales podrían ser las principales causas, por lo que las intervenciones políticas en el plano nacional al objeto de distribuir los recursos podrían ser la solución clave para reestablecer el equilibrio. Por consiguiente, una cuestión fundamental es la viabilidad de tales políticas en el contexto de la liberalización y la mundialización. Culpeper propuso una serie de fórmulas políticas que, si bien podrían ser susceptibles de discusión, podrían elaborarse de forma que la oposición fuera mínima y se obtuvieran resultados positivos, disminuyendo la desigualdad y al mismo tiempo apoyando el crecimiento económico.

Las reflexiones de Culpeper dieron lugar a una discusión general sobre la impor-

tancia relativa de la desigualdad intranacional contra la internacional. Si bien hubo acuerdo general en que la existencia de más instrumentos políticos concretos propicia que se preste más atención a la desigualdad dentro de los países que a nivel mundial, muchos participantes presentaron argumentos convincentes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos redistributivos en los ámbitos regional y mundial.

En su presentación, Berry sostuvo que, no obstante los puntos débiles del análisis de la causalidad que vincula la mundialización neoliberal con la desigualdad y la pobreza, es importante considerar de igual manera sus otros factores determinantes—incluyendo la concentración de las tierras, la tendencia a privilegiar la población urbana y el acceso desigual a la educación. También recordó a los participantes que la mundialización puede mitigar la desigualdad entre los países; así, algunos países pobres que han llevado a cabo políticas para explotar el pro-

ceso han logrado tasas impresionantes de crecimiento económico.

Orientaciones futuras

Los participantes propusieron tres temas para debate en el próximo retiro organizado por UNRISD para funcionarios de las Naciones Unidas: la gobernabilidad mundial, las Naciones Unidas y la mundialización neoliberal; la acción global contra la polarización nacional y la mundialización mundial; y respuestas nacionales a la mundialización. Se llegó a un consenso acerca de la necesidad de centrarse en pruebas empíricas y fórmulas políticas específicas en estos tres ámbitos.

El informe completo de la reunión se publicará en un próximo número de *UNRISD Conference News*. Los cuatro documentos encomendados para esta reunión se incluirán en un volumen que editará UNRISD próximamente.

El retiro y las próximas publicaciones han sido financiados por la Fundación Rockefeller y el presupuesto básico de UNRISD.

Estructura étnica, desigualdad y gobernabilidad del sector público

27–28 de mayo de 2002, Ginebra

Este taller congregó a investigadores de África, Asia y Europa para discutir métodos y propuestas de los países con miras a elaborar un nuevo proyecto de UNRISD sobre estructura étnica, desigualdad y gobernabilidad del sector público. Desde el decenio de 1990, la mayoría de los países han llevado a cabo reformas para cambiar las estructuras de incentivos, administración y gobierno de sus sectores públicos. Sin embargo, apenas se ha investigado la medida en que las divisiones y desigualdades étnicas afectan a la reforma del sector público. La eficiencia y el buen gobierno pueden ser objetivos difíciles de alcanzar en el sector público si surgen conflictos o si las clases privilegiadas se muestran insatisfechas con las normas que determinan la selección de instituciones públicas o abrigan temores en torno a la exclusión. Así pues, el proyecto de UNRISD se centra en cues-

tion de diversidad, representación y cohesión respecto de la constitución y gestión del sector público.

Tres hipótesis que orientaron el estudio proporcionaron un telón de fondo para las discusiones del seminario. En primer lugar, contrariamente a la opinión de muchos analistas, la fragmentación étnica no conduce necesariamente a malos resultados. La configuración de las divisiones étnicas varía según las estructuras sociales, y éstas son menos polémicas en algunos países que en otros. En segundo lugar, aún en los casos en que la cuestión étnica constituye un problema, pueden crearse instituciones para frenar la inestabilidad y promover la cohesión o el acuerdo. En tercer lugar, un sector público inclusivo puede desarrollarse de conformidad con un gobierno democrático.

Se organizaron debates en torno a una clasificación de los países por polarización étnica. Se realizaron cinco tipos de estructuras. En primer lugar, la conocida como *unipolar*, se refiere a casos donde una etnia es claramente dominante. Se discutió la situación de Botswana y Lituania. En Botswana, los tswana representan aproximadamente el 70 por ciento de la población. A través de un pacto de grupos selectos multiétnicos firmado en el momento de la independencia, la lengua setswana fue declarada lengua oficial (junto con el inglés), a cambio de una distribución equitativa de recursos entre todos los grupos. El crecimiento económico sostenido ayudó a consolidar el pacto y a despolitizar la cuestión étnica. En Lituania, el grupo indígena representa aproximadamente el 80 por ciento de la población. En este país, los gobiernos han logrado prescin-

dir de las estrictas leyes de ciudadanía que determinan la participación en las instituciones estatales en Letonia y Estonia, países profundamente divididos.

Durante el taller se prestó particular atención a la hipótesis de que la competencia para la representación en el sector público probablemente se caracterice por una polarización étnica menos marcada en los entornos unipolares. La política electoral puede provocar conflictos en el grupo étnico dominante, permitiendo a los miembros de grupos minoritarios participar activamente en partidos integrados por miembros del grupo étnico dominante.

Fiji y Letonia sirvieron de ejemplo para discutir el segundo tipo de estructura, denominada *bipolar*, que representa casos en que sólo existen dos grupos étnicos, o en los que predominan dos grupos aproximadamente iguales en un entorno multiétnico. En Fiji, los grupos étnicos fijianos representan cerca del 50 por ciento de la población y los grupos de origen indio el 45 por ciento. En Letonia, los grupos étnicos letones constituyen cerca del 58 por ciento de la población y los rusos el 30 por ciento. Sin embargo—si bien las políticas de la rusificación han puesto en desventaja a los grupos étnicos letones—en virtud de las leyes de ciudadanía introducidas en el momento de la independencia, más del 76 por ciento de los ciudadanos del país son letones, y sólo el 17 por ciento rusos.

El tercer tipo de estructura, denominada *tripolar*, se refiere a los casos en que existen sólo tres grupos, o tres grandes grupos en un entorno multiétnico. Se discutió la situación de Bosnia y Nigeria. En Bosnia, los musulmanes, serbios y croatas constituyen respectivamente el 44, 31 y 17 por ciento de la población. La guerra y la intervención extranjera han conducido al establecimiento de una serie de instituciones de gobierno muy complejas en este país: administración internacional, una confederación relajada, dos entidades políticas distintivas, y una legislación cantonal y comunal. Por su parte, Nigeria

es una federación de 36 estados integrados por más de 370 grupos étnicos. No obstante esta diversidad, hay tres grupos, que representan aproximadamente el 55 por ciento de la población, y que han influido considerablemente en la política de manera histórica. Se han establecido complejas instituciones gubernamentales a nivel federal, estatal y local para manejar la diversidad y la tripolaridad.

Una hipótesis importante que orienta el estudio sobre los casos bipolares y tripolares es que, si la etnia está politizada, los grupos privilegiados probablemente apliquen políticas hegemónicas que provoquen una gran inestabilidad y una representación desproporcionada en las instituciones estatales. Esto puede estar relacionado con una negociación de alcance limitado y con el establecimiento de múltiples alianzas en continuo cambio. En tales contextos, probablemente no sean sostenibles las instituciones de gobierno que no ven por los demás grupos étnicos y que se basan en las reglas de la mayoría.

Los dos últimos tipos de estructuras se refieren a casos de fragmentación étnica: *multipolaridad fragmentada*—un alto grado de fragmentación; y *multipolaridad concentrada*—fragmentación que brinda a algunos grandes grupos la posibilidad de organizar coaliciones selectivas. Se discutieron los casos de la India, Papua Nueva Guinea y Tanzania, que corresponden al primer tipo, y de Ghana y Kenya, que se ajustan al segundo. En Tanzania existen más de 130 grupos étnicos, y los tres grupos más grandes tan sólo representan el 23 por ciento de la población. La (bi)polarización ha tenido lugar únicamente en la pequeña isla de Zanzíbar. En Papua Nueva Guinea se hallan más de 800 grupos lingüísticos y numerosos clanes, y el grupo más grande representa tan sólo el 4 por ciento de la población. La multipolaridad fragmentada de la India se atribuye a la diferenciación de lenguas, religiones y castas—aunque los conflictos religiosos amenazan con una orientación hacia la bipolaridad o tripolaridad.

La estructura étnica es mucho más notoria en Ghana y Kenya que en Tanzania y Papua Nueva Guinea, y afecta menos en Ghana que en Kenya. Cinco grupos étnicos representan aproximadamente el 70 por ciento de la población de Kenya. Cuatro de ellos son relativamente iguales en proporción (entre 11 y 14 por ciento cada uno), mientras que el grupo más grande representa tan sólo el 21 por ciento de la población. Esto revela que la identidad étnica puede adoptar formas muy importantes en países con grupos relativamente grandes e iguales. En Kenya, por ejemplo, los políticos de cada uno de los cinco grupos principales pueden creer que, al crear coaliciones étnicas selectivas, tienen las mismas oportunidades de gobernar. En Ghana, los akanes representan el 44 por ciento de la población, pero la división interna del grupo parece que reduce su dominio: el conflicto étnico es más marcado entre un subgrupo de los akanes—los asante—y el segundo grupo más grande, los ewe. El comportamiento político basado en la identidad étnica probablemente sea menos dominante en los casos de multipolaridad fragmentada que en los de multipolaridad concentrada y, es probable que se constituyan partidos nacionales de coalición étnica, en el caso en que los partidos políticos tengan que recurrir a una gran variedad de grupos étnicos para ganar las elecciones.

Los participantes del seminario abordaron igualmente dos enfoques metodológicos que orientarán la investigación en el marco del proyecto. El primero se centrará en recabar datos y analizar las divisiones y desigualdades étnicas. Los investigadores determinarán las divisiones étnicas, incluidas las diferencias en el interior de cada grupo, y analizarán asimismo, en la medida de lo posible, cómo otros tipos de divisiones, como las de clase y género, afectan a las divisiones étnicas. Se esforzarán también por identificar modelos o estructuras de las divisiones y analizar la evolución de las mismas. También estudiarán las normas que determinan los nombramientos para cargos en las instituciones públicas, así como sus resulta-

dos, centrándose en cuatro instituciones principales: servicio civil, sistema de partidos, gabinete y parlamento. Analizarán si la distribución de los gabinetes es representativa de la variedad étnica o desigual, al igual que las percepciones de tal distribución y las normas que la rigen. Los investigadores también examinarán el grado en que las desigualdades socioeconómicas se reflejan en la asignación de cargos en las instituciones del sector público. Además, dado que las normas para la representación en los sistemas del gabinete, el parlamento y los partidos dependen en parte de la decisión de los ciudadanos, estudiarán la preferencia de los votantes al establecer estas instituciones.

El segundo enfoque tratará con instituciones para el manejo de la diversidad, la desigualdad y la competencia, abarcando desde las normas electorales hasta los acuerdos de gobierno con respecto al reparto de poderes, la descentralización, el federalismo y la protección de los derechos de las minorías. También se examinarán las políticas de acción afirmativa encaminadas a corregir la representación desproporcionada. Los investigadores adoptarán una perspectiva histórica al tratar de responder a las siguientes preguntas: ¿En qué medida son efectivas las instituciones establecidas en la actualidad en lo que respecta al manejo de la división y la desigualdad? ¿Promueven estas instituciones resultados mayoritarios o

consensuales? ¿Se excluye necesariamente a grupos étnicos minoritarios de los resultados mayoritarios? Si las instituciones se esfuerzan por promover unos resultados mayoritarios, ¿contienen asimismo garantías que pueden dar resultados consensuales? ¿Qué alternativas pueden proponerse teniendo en cuenta las pruebas obtenidas del estudio de las estructuras étnicas, las desigualdades y el comportamiento electoral?

En el próximo número de **UNRISD Conference News** se publicará un informe completo sobre este seminario. El seminario y el proyecto están financiados por la Fundación Ford y el presupuesto básico de UNRISD. Los informes sobre el proyecto de investigación están previstos para septiembre de 2003.

Envejecimiento, desarrollo y protección social

8–9 de abril de 2002, Madrid, España

Esta conferencia, contribución de UNRISD a la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, congregó a expertos internacionales y gerontólogos de renombre internacional para presentar sus trabajos, y se centró en tres temas interrelacionados: las trayectorias del desarrollo, el cambio social y el bienestar en la vejez; la protección social formal para las personas mayores; y la economía de la atención.

En su presentación introductoria, Peter Lloyd-Sherlock puso de relieve las diversas experiencias del envejecimiento y desaconsejó presentar a las personas mayores como un grupo de interés especial con inquietudes distintas y posiblemente en conflicto con las de otros grupos de edad. Señaló que los debates actuales sobre el envejecimiento de la población y la política pública se basan fundamentalmente en la gerontología de los países del Norte y en la economía política neoliberal, marcos de referencia que pueden ser de poca pertinencia para muchos pueblos de países del Sur, donde actualmente vive la mayoría de las personas mayores.

Trayectorias del desarrollo, el cambio social y el bienestar en la vejez

El creciente número de personas mayores repercute en los modelos actuales del desarrollo en todos los países, tanto en el Norte como en el Sur. En las presentaciones de esta sesión se analizó el modo en que los cambios socioeconómicos producidos en los diferentes entornos regionales han repercutido en el bienestar de las personas mayores.

En Gran Bretaña, la situación socioeconómica de las personas mayores cambió considerablemente en el siglo pasado. En su presentación, Paul Johnson examinó desde una perspectiva histórica, cómo el mejoramiento en el acceso a los beneficios de la pensión, la atención de la salud y la participación política; habían cambiado con el tiempo las expectativas de las personas con respecto a la vejez.

Las mejoras introducidas en los programas sociales orientados a personas mayores generalmente se basan en decisiones políticas. En su estudio de Brasil, Ana Amélia Camarano examinó cómo, en el contexto de un rendimiento

económico modesto, la situación socioeconómica de las personas mayores y sus familias mejoró tras adoptarse la decisión política de establecer una serie de programas sociales—especialmente los beneficios de la pensión—orientados a las personas mayores. Sin embargo, señaló que en Brasil existen diferencias regionales importantes, y que los progresos realizados en lo concerniente a las personas mayores contrastan con el deterioro de la situación económica de otros grupos de edad.

En contraste, en el decenio de 1990 se observó una decadencia de los sistemas de protección en muchos países de Europa del Este, lo que incidió considerablemente en el bienestar de las personas mayores. Según Vladislav Bezrukov, entre 1986 y 1998 en Ucrania, la pensión básica se redujo del 40 por ciento del salario del trabajador promedio, al 28 por ciento. Por consiguiente, las personas mayores se vieron obligadas a buscar fuentes de ingresos complementarias y basadas en el mercado, y/o a depender del apoyo de familiares más jóvenes. Sin embargo, en un contexto caracterizado por

una alta tasa de desempleo y por la discriminación contra solicitantes de empleo de edades mayores, podría afirmarse que esta situación es de mutua privación.

En la presentación de Du Peng sobre China, éste cuestionó la viabilidad a largo plazo del apoyo a la protección intergeneracional en este país, donde los mecanismos tradicionales de apoyo a la familia cada vez son menos capaces de cubrir el creciente número de personas mayores. Puso de relieve los cambios demográficos y socioeconómicos que estaban produciéndose en China a un ritmo y una escala sin precedentes, y señaló que en los casos en que la pensión estatal tenía una cobertura limitada, se precisarían más leyes que garantizaran los derechos y prestaciones a las personas mayores.

La protección social formal y las personas mayores

En la segunda sesión de la conferencia se consideraron diferentes enfoques de política pública sobre prestaciones de vejez, y servicios de atención a largo plazo y asistencia médica.

Los gobiernos de los países del Sur han adoptado diversas estrategias en materia de prestaciones de vejez. En su presentación, Armando Barrientos comparó los regímenes de pensiones establecidos en Chile, Singapur, Sudáfrica y Brasil. Con el apoyo del Banco Mundial, Chile y Singapur transformaron radicalmente sus regímenes de pensiones en planes de jubilación individuales. En algunos lugares, se ha puesto de relieve el éxito de esta iniciativa, que ha impulsado el desarrollo económico al aumentar la tasa de ahorros privados y mejorar los mercados de capitales y del trabajo. Sin embargo, según Barrientos, el coste de estos regímenes privados ha sido considerablemente superior al de los regímenes de pensiones universales establecidos en Sudáfrica y Brasil—que, a su juicio, han tenido consecuencias manifiestas en la pobreza, el bienestar de las personas mayores y el desarrollo económico.

La prestación de servicios de atención a las personas mayores es un motivo de creciente preocupación en los países industrializados. En Japón, donde la mayor parte de la población supera los 60 años de edad, se introdujo en 2000 un seguro de asistencia social. Tetsuo Ogawa evaluó el éxito de este sistema y señaló que podía servir de ejemplo para otros países industrializados.

La prestación de servicios de atención a la salud se ha considerado en menor grado que la reforma de los regímenes de pensiones. Sin embargo, en muchos países aumenta continuamente el porcentaje de personas mayores que requiere servicios de salud. El desinterés por la prestación de servicios de atención a la salud de las personas mayores se observaba igualmente en el África Subsahariana. En su presentación, Di McIntyre expresó su preocupación por la evidente predisposición a prestar cuidados de maternidad y de la infancia en detrimento de la atención de salud de las personas mayores en muchos países africanos.

Los distintos seguros privados de enfermedad—que están introduciéndose en un número creciente de países—probablemente discriminen a las personas mayores y discapacitadas, salvo que se creen fondos específicos. Dichos fondos existen en los Estados Unidos y Argentina y, al establecer una comparación entre los mismos, Nérida Redondo descubrió que ninguno de ellos había logrado contener los gastos devengados por la prestación de servicios de atención de salud, por lo que afirmó que debería tenerse en cuenta el considerable costo que supondría desviarse de los programas públicos universales.

Las personas mayores y la economía de la atención

En la última sesión de la conferencia se examinó el modo en que los cambios producidos en las estructuras familiares, los valores tradicionales, los modelos de empleo y la economía están afectando a la prestación informal de atención a las personas mayores.

Nana Apt consideró algunos procesos de modernización y cambios operados en el sistema de apoyo informal en el África Subsahariana. Argumentó que la urbanización, la migración de las generaciones más jóvenes en busca de empleo y el colapso de las estructuras de hogares extensos, han propiciado el aislamiento y la vulnerabilidad económica de las personas mayores, particularmente en zonas rurales.

Amenudo se afirma que las familias extendidas “tradicionales” están siendo sustituidas por estructuras “nucleares” en los países en desarrollo. Sin embargo, en México se observa el caso contrario, como señalan Cristina Gomes da Conceição y Verónica Montes de Oca Zavala. Dado que las personas mayores viven más años y en vista de las barreras económicas que impiden a los jóvenes comprar su propia casa, ha habido un incremento en la proporción de familias donde conviven tres generaciones. En muchos casos, el cuidado de los familiares más jóvenes recae sobre las mujeres mayores de la familia, por lo que, según este estudio, estas últimas preferirían vivir solas.

Así, en algunas situaciones, las personas mayores también realizan una importante labor como prestadores de atención. En Tailandia, la epidemia del VIH/SIDA ha tenido implicaciones importantes para las personas mayores, que a menudo atienden a sus hijos enfermos, ofreciéndoles tanto medios de vida como cuidados. En su presentación, John Knodel y Chanpen Saengtienchai mostraron la gran carga que este papel supone para los padres de muchas personas infectadas por el VIH/SIDA, cuyo cuidado no sólo conlleva esfuerzos físicos, sino también importantes consecuencias económicas.

Para la organización de este evento, UNRISD recibió el apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), el gobierno de España y las principales entidades de financiación del Instituto.

UNRISD en el Foro Social Mundial: Regulación de las instituciones mundiales 3–4 de febrero de 2002, Porto Alegre, Brasil

En el Foro Social Mundial celebrado este año, UNRISD y el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE) patrocinaron un seminario sobre la Regulación de las instituciones mundiales. El evento congregó a expertos y activistas interesados en cuestiones de gobernabilidad y desarrollo mundial. Seis ponentes discutieron y debatieron sobre los tipos de reforma que se necesitan con relación a las organizaciones financieras internacionales, las empresas multinacionales y las grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo.

El seminario comenzó con un debate sobre el papel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Thandika Mkandawire, Director de UNRISD, señaló las formas en que las instituciones de Bretton Woods habían adaptado sus políticas en los últimos años para abordar las cuestiones del alivio de la pobreza y “buen gobierno”. Sin embargo, señaló cuatro limitaciones de este cambio de política: en primer lugar, estas cuestiones generalmente tienden a ser abordadas de un modo tecnocrático; segundo, dichas organizaciones siguen ignorando aspectos importantes relativos a la distribución de ingresos y a la equidad social; en tercer lugar, su concentración en los problemas de determinados grupos ha creado una estructura dual de servicios sociales que tiene poco éxito en muchos países; y cuarto, su creciente reconocimiento del papel del Estado está viéndose menoscabado por el hecho de que numerosas políticas neoliberales han debilitado considerablemente la capacidad del Estado en muchos países.

En su presentación al seminario, Peter Evans, Profesor de Sociología de la Universidad de California, Berkeley, reconoció que el Banco Mundial y el FMI tienen un papel que desempeñar en la promoción del desarrollo, pero insistió en que los países del Sur deberían participar de manera más activa en las estructuras de go-

bierno de estas organizaciones. Refiriéndose en particular al FMI, Evans afirmó que las opiniones de los gobiernos de los países del Sur, en el sentido de considerarse víctimas pasivas de las políticas del FMI o clientes pasivos que la Organización estaba recuperando, son un malentendido. A su juicio, era preciso que la mejora de las relaciones entre el Sur y el FMI se basara en esfuerzos más activos, organizados y colectivos desplegados por los países del Sur para reformar las políticas del Fondo, ya que, si bien la estructura de gobierno del FMI no es democrática, existen espacios para que el Sur aumente su poder e influencia en la Organización.

Reinaldo Gonçalves, Profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, defendió en su presentación que tanto el FMI como el Banco Mundial son instrumentos poderosos de política exterior utilizados por los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, y que estas instituciones más bien habían creado problemas, en lugar de solucionarlos. Al identificar los problemas principales que necesitan abordarse, destacó la falta de transparencia en las instituciones y organizaciones que constituyen los sistemas monetarios y financieros internacionales, la falta de regulación de determinadas áreas dentro de las operaciones financieras internacionales, como los centros en el exterior; y la condicionalidad y el “riesgo moral” asociados con los préstamos del FMI. Hizo un llamamiento para que se invirtiera el proceso de liberalización financiera, con más control del capital y determinadas restricciones tanto a las salidas como a las entradas de capital, bienes y servicios. Gonçalves también abogó por que el Banco Mundial y el FMI se sustituyeran por un Fondo de Desarrollo Internacional que financiara proyectos sociales, económicos y ambientales en los países en desarrollo.

Peter Utting, Coordinador de Investigación de UNRISD, evaluó la efectividad de

las iniciativas emprendidas en los últimos tiempos para mejorar los resultados sociales y ambientales de las empresas multinacionales, a través de normas establecidas por las diferentes partes interesadas, vigilancia y programas de certificación que involucran organizaciones multilaterales y no gubernamentales. Consideró que algunos de estos programas tienen mejoras respecto a iniciativas voluntarias asociadas con la “autorregulación empresarial” (como por ejemplo los códigos de conducta de las empresas), las cuales generalmente son débiles en términos de diseño, aplicación e impacto. No obstante, observó cierta flaqueza en las iniciativas de las contrapartes interesadas, así como límites con respecto al grado en que tales programas pueden ampliarse. En la actualidad, no sólo participan relativamente pocas empresas, sino que además los procesos de vigilancia, de presentación de informes y de certificación que éstas promueven suelen ser complejos y costosos. Utting consideró improbable que tal enfoque llegara a ser un sistema mundial efectivo para la regulación de las empresas multinacionales, y señaló la necesidad de prestar más atención a la creación o expansión de “procedimientos de presentación de quejas”, que permitieran identificar y hacer frente a la vulneración de las normas por parte de dichas empresas. Los sistemas de regulación basados en la presentación de quejas abarcarían varios tipos de actores y procesos, incluyendo agencias de la ONU, marcos legislativos nacionales, organizaciones no gubernamentales de control, sindicatos, medios de comunicación, instituciones mediadoras (con funciones similares a las del Defensor del Pueblo), y activismo de accionistas y consumidores.

En su contribución a los debates, David Korten, Presidente del People-Centered Development Forum, hizo un llamamiento para que se emprendiera una amplia reforma de la gobernabilidad y de la rendición de cuentas de las empresas multi-

nacionales a escala mundial. Señaló que, dado que la empresa de responsabilidad limitada que cotiza en la Bolsa se había establecido como una forma institucional legal para explotar a los pueblos, mercados y recursos de los territorios coloniales, y para proteger asimismo los poderosos intereses económicos de la rendición de cuentas, ésta no debería desempeñar un papel en el establecimiento o la reformulación de la política pública y de las prioridades en las sociedades democráticas. A su juicio, ni las iniciativas voluntarias ni la regulación pública, poco sistemática, podrían hacer frente a los negativos efectos ambientales y sociales de las actividades realizadas por las empresas multinacionales. Abogó por el establecimiento de varios requisitos alternativos para abordar los siguientes problemas: la eliminación de formas institucionales que concentran el poder económico y que son inmunes a la rendición pública de cuentas; la desintegración de los monopolios; la redistribución equitativa de los derechos de propiedad; el fortalecimiento y la democratización de las

Naciones Unidas, y la desarticulación del Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio.

Al retomar la cuestión de las grandes ONG de desarrollo, Deborah Eade, editora de la publicación *Development in Practice*, identificó las tendencias recientes con respecto a sus criterios y funciones. Éstas incluían el creciente reconocimiento de las limitaciones de las actividades realizadas en el marco de proyectos para luchar contra la pobreza y la necesidad apremiante de establecer una política de apoyo para cambiar el entorno político; el énfasis cada vez mayor en la democratización y la gobernabilidad; la presión ejercida sobre las ONG para que participen en la prestación de servicios; y la competencia cada vez mayor entre las ONG para tener acceso a los medios de difusión y acaparar la atención del público, al objeto de conseguir más influencia y recursos. Teniendo en cuenta estas tendencias, se plantean cuestiones importantes sobre el modo en que se establecen los programas; la legitimidad

de que las ONG asuman la defensa de una política en nombre de terceros y su obligación de rendir cuentas a una gran variedad de partes interesadas; y la división de la fuerza laboral entre las ONG del Norte, que participan en una política de apoyo destacada, y las ONG del Sur, que se limitan a llevar a cabo proyectos y a proporcionar información. Eade hace un llamamiento para que se abandone la “política de apoyo paternalista” y se adopte una “política de apoyo participativa”, cambio de orientación que supondría el establecimiento de amplias alianzas de la sociedad civil y de los movimientos ecologistas, una “política de apoyo centrada en las personas”, que permita a las mismas negociar sus propios derechos; y—en lugar de establecer programas y destinar recursos en proporción—la actuación solidaria de las ONG internacionales.

Los resúmenes de estas presentaciones del seminario están disponibles en www.unrisd.org.

El Pacto Mundial y la sociedad civil: Previendo un curso de colisión

Peter Utting

Cualquier funcionario de las Naciones Unidas que asistiera al Foro Social Mundial (FSM), celebrado en Porto Alegre, Brasil en 2002, se hubiera sorprendido ante el hecho de que muchos activistas, no obstante su crítica de las Naciones Unidas, siguen creyendo en la organización. Contrariamente a las demandas de reducción radical o de abolición de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; muchas organizaciones de la sociedad civil están solicitando la reforma de las Naciones Unidas, pero también su fortalecimiento. Sin embargo, las relaciones de las Naciones Unidas con las empresas multinacionales son motivo de considerable inquietud. La reciente formación de “alianzas” entre organizaciones de las Naciones

Unidas y empresas multinacionales pone de relieve la naturaleza cada vez más estrecha de esta relación. El perfil más destacado de estas asociaciones es el Pacto Mundial, donde, a finales de 2001, se ha registrado el apoyo de aproximadamente 400 empresas en 30 países. Estas empresas han acordado respetar los nueve principios relacionados con los derechos humanos, las normas laborales y la protección ambiental. En el Foro Social Mundial, el Pacto Mundial fue objeto de duras críticas.

En el artículo “Las asociaciones entre la ONU y el sector empresarial: ¿Qué es lo que está en juego?” (*UNRISD Informa*, Núm. 23, otoño/invierno de 2000), el autor (del presente documento) señaló que uno de los riesgos asociados al estrechamiento de las relaciones entre las

Naciones Unidas y las empresas multinacionales era el aumento de las tensiones entre las Naciones Unidas y determinadas partes integrantes de la sociedad civil. En efecto, estas tensiones se han incrementado en los dos últimos años, lo que se pone claramente de manifiesto en las comunicaciones entre la oficina del Pacto Mundial y la ONG Corpwatch, con sede en Estados Unidos. No deberían sorprendernos los desacuerdos entre una oficina de Naciones Unidas y una ONG particular. Sin embargo, en este caso suscita inquietud que Corpwatch actúe como Secretariado de la Alliance for a Corporate-Free UN (Alianza para unas Naciones Unidas sin empresas), integradas por algunos grupos de investigación y apoyo muy conocidos y respetados establecidos tanto en el Norte como en el Sur, tales como

Third World Network, el Instituto de Estudios Políticos, Focus on the Global South, y el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE). En el Foro Social Mundial, se mostró claramente que estos miembros de la Alianza habían asumido un papel de liderazgo en el “movimiento” mundial encaminado a imponer una alternativa al modelo de la mundialización económica actual. Entre las 5,000 organizaciones presentes en el FSM, y muchas otras que no pudieron asistir a Porto Alegre, estas organizaciones tienen un grado considerable de legitimidad.

Dado que parte del fundamento del Pacto Mundial es la promoción de nuevas formas de “buen gobierno” basadas en el diálogo y la colaboración de las múltiples partes interesadas, es de lamentar que tal iniciativa proporcione una base de confrontación con algunos sectores de la sociedad civil. ¿Por qué surgen estas tensiones? Se han expresado los siguientes motivos de inquietud:

- Se han establecido pocos mecanismos efectivos para asegurar que las empresas cumplan con los principios del Pacto Mundial.
- En lugar de mantenerse para abordar y asimilar los nueve principios de un modo consistente, las empresas pueden elegir los principios y actividades empresariales que desean acometer.
- El Pacto Mundial se ocupa más en mejorar la imagen y la legitimidad de las grandes empresas que en mejorar las normas sociales y ambientales.
- La teoría del “aprendizaje social” y el enfoque sobre “las mejores prácticas” que sostienen el Pacto Mundial contienen imperfecciones, ya que generalmente ignoran las presiones claves y los marcos institucionales que alientan a las empresas a mejorar sus principios, a evitar “las malas prácticas” y a ignorar factores estructurales fundamentales y de otro tipo que fomentan la irresponsabilidad empresarial.

Los estudios realizados actualmente en el marco del proyecto de UNRISD sobre Responsabilidad Empresarial para el Desarrollo Sostenible—donde se examinan las asociaciones empresariales y la responsabilidad social de las empresas—ha suscitado igual preocupación, por lo que se precisa otro enfoque. ¿Cómo puede evolucionar la situación? Cabe contemplar tres perspectivas.

En primer lugar, las Naciones Unidas pueden seguir captando empresas multinacionales a través de iniciativas voluntarias relativamente débiles. Dejando a un lado la cuestión de si este tipo de captación es efectiva para la promoción de la responsabilidad social de las empresas, la continuación de esta práctica puede enfrentar a las Naciones Unidas a un vociferante sector de la sociedad civil. Este tipo de tensión aparentemente contradiría el espíritu que las Naciones Unidas han tratado de lograr por más de una década, en términos de acuerdos relativos a la gobernabilidad global que implican mejores relaciones con la sociedad civil.

En segundo lugar, las Naciones Unidas pueden tener en cuenta no sólo los llamamientos de la Alliance for a Corporate-Free UN, sino también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras partes interesadas en el Pacto Mundial, que han propuesto la modificación o reelaboración del Pacto para garantizar el cumplimiento de los nueve principios fundamentales por parte de las empresas. Algunas ideas o propuestas de reforma suponen la protección de empresas participantes potenciales; una mayor transparencia de la participación de las empresas en el Pacto; obligar a las empresas a presentar informes sobre los nueve principios fundamentales; prestar más atención y revelar públicamente informaciones y observaciones de partes interesadas no empresariales; vigilancia independiente del cumplimiento; controles más estrictos del modo en que las empresas “utilizan” su asociación con las Naciones Unidas; y otras medidas de protección contra empresas que

utilizan el Pacto fundamentalmente a los efectos de las relaciones públicas.

Si se modificaran tales formas, el Pacto podría servir para mejorar las relaciones entre las Naciones Unidas y la sociedad civil, y para promover de un modo más efectivo la responsabilidad empresarial. Por supuesto, una consecuencia inesperada podría ser que las empresas se retiraran. (Una de las mayores partidarias del Pacto, la Cámara Internacional del Comercio, ha expresado claramente que “se mostraría desconfiada” ante tales cambios.) Algunos sostienen que esto no puede ser perjudicial: muchas grandes empresas multinacionales ya participan en las iniciativas voluntarias de responsabilidad empresarial y en la presentación de informes sobre “las mejores prácticas” y, desde la perspectiva del desarrollo social y sostenible, su participación en el Pacto apenas supone un valor agregado. Pero la retirada de las empresas podría socavar algunos beneficios potenciales del Pacto. En algunos países desarrollados y en transición, el Pacto serviría para crear conciencia sobre cuestiones relativas a la responsabilidad empresarial. Otra ventaja del Pacto sería que las empresas multinacionales se hallarían bajo la competencia de la legislación internacional—aunque algunos tipos de legislación sean “blandos”. A menudo se cree equivocadamente, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está orientada a los Estados y no a las empresas. El Pacto Mundial podría ayudar a subsanar este error al hacer más explícita la conexión entre las empresas y la legislación internacional sobre derechos humanos.

La tercera perspectiva supone continuar con el experimento del Pacto Mundial, con o sin mayores reformas, y buscar un enfoque alternativo, dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Pacto estipula que no pretende sustituir otros enfoques “reguladores” a nivel internacional basados en la vigilancia y el cumplimiento. Sin embargo, en la práctica, éste es casi el único enfoque existente en el que participan un número considerable de em-

presas. Un motivo de inquietud fundamental acerca de las alianzas entre las Naciones Unidas y las empresas multinacionales en general es el hecho de que éstas reflejan un cambio de perspectiva a través del cual algunas iniciativas voluntarias poco entusiastas han desplazado mecanismos y acuerdos institucionales importantes que implican la adopción de las siguientes medidas: nuevas formas de legislación internacional; vigilancia o control de las actividades de las empresas multinacionales; mediación y arbitraje de conflictos; y estudios críticos sobre las alternativas reguladoras y los

efectos sociales, ambientales y de desarrollo en las empresas multinacionales.

Se han presentado algunas ideas y propuestas relativas al sistema de las Naciones Unidas que podrían servir para corregir este desequilibrio (véase el cuadro), aunque las iniciativas emprendidas de conformidad con aquellas han sido extremadamente lentas o no existen. Si las Naciones Unidas se compromete a promover la responsabilidad social de las empresas, así como la gobernabilidad y la participación de múltiples partes interesadas, entonces este sería sin duda el

momento de considerar más seriamente dichas alternativas.

Peter Utting, Coordinador de Investigación en UNRISD, dirige la labor del Instituto en materia de responsabilidad social y ambiental de las empresas. Se reconoce y agradece la colaboración de **Désirée Abrahams**, Asistente de Investigación.

Este artículo se encuentra igualmente, en su forma modificada, en **Development in Practice**, vol. 12, núm. 5, noviembre de 2002, pp. 644-647.

Reconsiderar las relaciones entre las Naciones Unidas y las empresas

- Amigos de la Tierra Internacional propuso que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se considerara una Convención sobre responsabilidad empresarial que estableciera y cumpliera unas normas sociales y ambientales mínimas, alentara la presentación efectiva de informes, y ofreciera incentivos para que las empresas multinacionales tomaran medidas para evitar efectos negativos.
- El Foro Internacional sobre la Mundialización ha abogado para la creación de una Organización de las Naciones Unidas para la Responsabilidad Empresarial que proporcionaría información sobre prácticas empresariales, como base para las acciones legales y los boicoteos de los consumidores. Christian Aid ha propuesto crear una Autoridad Reguladora Mundial que establecería las normas de conducta de las empresas multinacionales, vigilaría el cumplimiento de las mismas y se encargaría de las infracciones. Otros han solicitado la reactivación del antiguo Centro de Empresas Multinacionales de las Naciones Unidas, algunas de cuyas actividades se transfirieron a UNCTAD hace un decenio.
- La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos ha establecido un Grupo de Trabajo sobre empresas multinacionales, que está considerando el Código de Conducta para éstas y otras empresas y ha redactado los Principios y Responsabilidades de Derechos Humanos para las Empresas Multinacionales y otras. El Grupo de Trabajo también ha propuesto la creación de entidades que colaboren en la aplicación de los Principios y en la vigilancia del cumplimiento.
- Se ha propuesto que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establezca un Relator Especial sobre las empresas multinacionales, y que otros relatores especiales actuales se encarguen de abordar los problemas relativos a las empresas multinacionales. También se ha señalado la necesidad de ampliar las obligaciones legales internacionales en el ámbito de los derechos humanos, y de poner las empresas bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
- Al negociar con las empresas, las Naciones Unidas podrían imponer o ampliar las normas de adquisición relativas a las normas sociales y ambientales.
- Los sindicatos y otras partes interesadas han exhortado durante muchos años a la OIT a fortalecer sus actividades de seguimiento y sus procedimientos para analizar los conflictos relacionados con la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que han seguido siendo extremadamente débiles.
- Las agencias especializadas de las Naciones Unidas, como la UNCTAD, el PNUD, el PNUMA y la OMS, así como la OIT, no deberían desentenderse del estudio crítico y el análisis de políticas sobre las empresas multinacionales, y sobre sus efectos sociales, medioambientales y de desarrollo en los países en desarrollo y en las iniciativas reguladoras.

Cambio agrario, género y derechos agrarios

6–7 de noviembre de 2001, Ginebra

Esta conferencia congregó a miembros del equipo de UNRISD que habían realizado estudios de campo en los dos últimos años en varios países del África Subsahariana, Brasil y Uzbekistán, en el marco del proyecto de UNRISD sobre cambio agrario, género y derechos agrarios. También participaron algunos especialistas que se dedican al análisis de cuestiones relativas al cambio agrario en otros contextos regionales. La conferencia brindó al equipo de investigación la oportunidad de presentar los resultados de sus estudios, de obtener retroalimentación al respecto y de identificar cuestiones comparativas resultantes de los estudios de caso por países, antes de concluir y publicar sus documentos. Las presentaciones y discusiones fueron muy variadas; no obstante, se plantearon tres temas generales.

El primer tema hace referencia a las políticas e instituciones relativas a la tenencia de la tierra, y a la medida en que éstas pueden incluir los intereses de las mujeres y facilitar su representación y participación en las decisiones de administración de la tierra. En uno de los estudios detallados se hace referencia al surgimiento de un consenso aparente, entre los actores de diferentes posturas ideológicas y políticas, sobre la cuestión agraria en el África Subsahariana. En dicho estudio se descubre que la División de Política Agraria del Banco Mundial, tras un proceso de replanteamiento, rechaza en esencia la reforma de la tenencia de la tierra basada en intervenciones estatutarias (tales como la obtención de títulos de propiedad de las tierras)—lo que supone una ruptura tajante con los sistemas tradicionales—y, en su lugar, subraya la importancia de “basarse en el sistema consuetudinario”. En teoría, esto reduciría tanto los gastos como los conflictos agrarios. Al mismo tiempo, muchas fuerzas progresivas, incluidas algunas organizaciones interna-

cionales no gubernamentales, como Oxfam UK, consideran que insistir en potenciar la gestión agraria a nivel local supone apoyar los procesos de enajenación y “apropiación de las tierras”.

Sin embargo, se plantearon cuestiones en torno al papel que desempeñan las instituciones locales en la gestión de la tenencia, la administración y el arbitraje de las tierras—asunto particularmente pertinente cuando la tendencia actual hacia la descentralización está conduciendo a la reorganización de los papeles y poderes de los actores locales en nombre de su participación más activa en las cuestiones de gobernabilidad. ¿Estos sistemas de gestión a nivel local favorecerán en mayor grado los intereses de las mujeres que las intervenciones estatutarias a nivel nacional? Esto no es seguro, ya que posiblemente las mujeres no tienen suficiente voz política en cuanto a la toma de decisiones relativas a las cuestiones agrarias, *incluyendo los sistemas de gestión local*. Además, si bien algunos participantes pusieron en duda las limitaciones de la legislación y la reforma legal como instrumentos orientados a impartir justicia en la distinción por género, también se señaló que era engañoso el dualismo mantenido por algunos defensores de los derechos de las mujeres y por autoridades políticas, que yuxtaponían los términos “estatutario” a “consuetudinario”. En primer lugar, existen numerosas pruebas de que estos dos ámbitos se constituyen mutuamente y de que, en la práctica, las mujeres recurren a estas dos series de principios al reclamar sus derechos a los recursos rurales. En segundo lugar, se temía que si el Estado abdicaba sus responsabilidades en los ámbitos de la política económica y social, el discurso del “sistema consuetudinario” podría reforzar una nueva política de “tradicionalismo”—el resurgimiento del caciquismo, por ejemplo—lo que podría entrar en conflicto con los prin-

cipios democráticos y la agenda de los derechos de las mujeres.

El segundo tema de discusión en la conferencia se refiere a la naturaleza *contingente* de la cuestión agraria y al grado en que su importancia varía en diferentes contextos. De forma más específica, ¿cómo puede formularse la cuestión agraria y del género de forma que se tengan en cuenta las diferentes variables que intervienen y determinan dónde y en qué situaciones la tierra llega a ser un recurso crítico y a formar realmente parte de las luchas de los pueblos, y de las mujeres, por la supervivencia y la mejora de su situación socioeconómica, y cuándo llega a ser una responsabilidad? Ya sea en el contexto de los debates nacionales sobre la reforma de la tenencia de la tierra o en la dinámica política asociada con la descentralización, los intereses de las mujeres por la tierra se han convertido en una cuestión controversial. En algunos países, han surgido tensiones y divisiones en la sociedad civil: si bien algunos defensores de la política han considerado que reconocer los derechos agrarios inequívocos de las mujeres constituye una intervención política “acertada” (porque supuestamente aumenta su poder de negociación en los hogares, con independencia de fuerzas contextuales más amplias), otros se han opuesto categóricamente a los derechos agrarios de aquellas, porque consideran que esto empeoraría la situación, ya que los grupos de presión a favor de la liberalización aprovecharían la ocasión para abrir los sistemas “consuetudinarios” de la gestión agraria a las fuerzas de mercado y los intereses comerciales extranjeros. Esta dicotomía es peligrosa, ya que descarta el tipo de análisis matizado que se precisa para identificar situaciones en que el acceso inadecuado a las tierras limita seriamente las empresas agrícolas administradas por las mujeres. Tampoco puede facilitar la presentación de

propuestas políticas apropiadas para impartir justicia en lo concerniente a la asignación de recursos a las mujeres rurales—como viudas/ hijas que viven en hogares dominados por hombres y como miembros de clases y comunidades sociales vulnerables que corren el riesgo de enajenación de sus tierras y de que no se reconozcan sus derechos en el contexto de la liberalización.

Por último, los efectos de los dos pilares gemelos del sistema neoliberal—las políticas macroeconómicas deflacionistas y la liberalización externa—en los me-

dios de vida agrarios en los países en desarrollo, han despertado la preocupación. Uno de los participantes de la conferencia especificó los mecanismos que habían movido la ralentización de la economía mundial hacia el ámbito agrario, provocando una crisis de proporciones considerables en muchas partes del mundo en desarrollo. Las políticas de liberalización externa, la caída de los precios de muchos productos exportados por los países en desarrollo; la amenaza que las importaciones de grano a un costo excepcionalmente bajo supusieron para los agricultores de los

países en desarrollo; los consiguientes cambios en los modelos de cultivo; y los recortes del gasto público destinado al desarrollo rural, se consideraron factores importantes que contribuían a la crisis actual de los medios de vida.

Esta conferencia fue una iniciativa conjunta de UNRISD y el Foro para los Estudios Sociales de Addis Abeba, Etiopía. Los resultados del proyecto de UNRISD sobre cambio agrario, género y derechos agrarios se publicarán en enero de 2003 en un número especial del *Journal of Agrarian Change*.

La necesidad de reconsiderar la economía del desarrollo

7–8 de septiembre de 2001, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Esta conferencia, una iniciativa conjunta de UNRISD y la Fundación Ford, congregó a 29 científicos sociales procedentes de países desarrollados y en desarrollo para que intercambiaran ideas sobre un enfoque alternativo a la perspectiva neoliberal de las cuestiones de desarrollo. Se discutió cómo podía servir la economía para habilitar al Sur y cómo reactivar la economía del desarrollo—no como una rama divergente de la economía dominante, sino como una disciplina cuya función es abordar los problemas fundamentales a que suelen enfrentarse los países en desarrollo.

Las discusiones mantenidas en esta reunión de dos días se estructuraron en cinco temas principales: la caída de la economía del desarrollo, las tendencias intelectuales actuales, los nuevos desafíos, las perspectivas regionales, y las estrategias y actividades futuras.

Al intercambiar opiniones sobre el primer tema, los participantes de la conferencia dieron diversas explicaciones al menoscabo de la economía del desarrollo en los decenios de 1970 y 1980. Hasta los años 70, los problemas del bienestar y el desempleo en los países desarrollados, y los de la pobreza y sub-

desarrollo en los países en desarrollo, se habían interpretado, respectivamente, desde la perspectiva de la economía keynesiana y la “economía del desarrollo”. Los participantes convinieron en que la crisis del petróleo, la inflación acompañada del estancamiento de la economía y el consecuente endeudamiento de los países en desarrollo supusieron una dura prueba para los modelos y teorías que habían sostenido las políticas tanto del bienestar como del desarrollo. Los participantes afirmaron que la contrarrevolución neoclásica y el predominio del monetarismo en los países altamente industrializados también contribuyeron a la mengua de la economía del desarrollo en el Sur. Algunos participantes señalaron que la economía del desarrollo fue igualmente considerada culpable debido a su asociación con estructuras de gobierno autoritarias, lo que menoscabó el atractivo para muchos movimientos sociales emergentes asociados con la tendencia hacia la democratización.

Además de atribuir la caída de la economía del desarrollo a las crisis económicas de los decenios de 1970 y 1980—y al predominio ideológico del neoliberalismo en las instituciones financieras

internacionales y en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)—los participantes observaron que la desaparición de la disciplina estaba estrechamente relacionada con la interpretación de la experiencia del desarrollo en la posguerra. Hasta 1993 se había hecho referencia al rendimiento económico espectacular de los países de Asia Oriental, para probar que la confianza en las fuerzas del mercado era una decisión acertada. Por el contrario, las “décadas perdidas” de gran parte de África y Latinoamérica se atribuyeron a la “planificación del desarrollo”, que distorsionó los precios y provocó un crecimiento más lento. Así pues, se evocaron las experiencias de los Estados quintaesenciales del desarrollo como evidencias en contra de la economía del desarrollo.

Las discusiones sobre el segundo tema adoptaron la forma de respuestas divergentes a la pregunta: “¿Cuál debería ser la relación entre una nueva economía del desarrollo y la economía dominante?” Un grupo propuso una clara separación de la economía dominante, que insiste en aplicar “parches” políticos o sociales para explicar por qué los resultados económicos se diferencian

de los anunciados por la teoría neoclásica. Así pues, la reactivación de la economía del desarrollo debería tener lugar fuera de los modelos y métodos de la economía dominante, es decir, debería establecerse en marcos históricos específicos, y tener en cuenta instituciones, prácticas y valores socioculturales, y estructuras de gobierno. Sin embargo, otro grupo de participantes consideró que muchas críticas importantes en la economía dominante podrían utilizarse tanto para denunciar las políticas neoliberales como para contribuir al nuevo replanteamiento del desarrollo. Estas críticas rigurosas podrían y deberían emplearse en enfoques no ortodoxos. A juicio de estos participantes, la metodología en sí misma debería ser menos importante que los esfuerzos sinceros para conseguir el auténtico desarrollo en diferentes entornos históricos e institucionales.

Los activistas recomendaron actuar con cautela, al señalar que, si bien las teorías económicas “erróneas” habían desempeñado un papel fundamental en todo esto, la adopción de modelos económicos particulares por parte de las autoridades políticas es en esencia una elección política. En los últimos años varios regímenes conservadores en países desarrollados se han visto en la necesidad, aún en contra de sus principios ideológicos, de adoptar soluciones keynesianas para hacer frente a las presiones políticas.

A continuación, los participantes abordaron los nuevos desafíos. La exhortación a establecer una nueva economía del desarrollo no obedece a un sentimiento de nostalgia por la “edad de oro” de la política del desarrollo, sino que más bien está motivada por la aplicación inmediata del programa inherente a la economía del desarrollo—la erradicación de la pobreza a través del desarrollo económico y una distribución equitativa. Sin embargo, los participantes convinieron en que, en vista de las diferentes circunstancias y las experiencias acumuladas, el nuevo modelo de-

bería hacer frente a nuevas cuestiones de índole muy diversa en un entorno mundial totalmente cambiado. Éstas incluyen el entorno internacional distinto, cambios en la economía, nuevas opiniones del Estado, y el nuevo programa social.

Con relación a estos nuevos parámetros, se llegó a un consenso acerca de la necesidad de realizar un enfoque más integrado sobre la economía. No obstante, tuvo lugar un intenso debate en torno a los medios que debían emplearse para la consecución de este objetivo. Si bien algunos participantes señalaron la necesidad de enfocar los esfuerzos hacia la integración práctica, en lugar de buscar una “gran teoría” para rebatir el modelo neoclásico, otros pusieron de relieve el valor de una nueva teoría económica. Se precisarían fundamentos intelectuales sólidos para luchar contra el sistema predominante. Los participantes insistieron igualmente en la necesidad de establecer un fuerte vínculo entre la investigación y la política—en particular en cuanto a la investigación que ayudaría a las autoridades decisorias a formular políticas de desarrollo acertadas.

El cuarto tema de discusión giró en torno a experiencias regionales. Las observaciones de algunos participantes de Latinoamérica se centraron en los flujos de capital internacional, la inversión extranjera directa y el papel que desempeñan las instituciones financieras en los procesos de desarrollo nacionales. Las discusiones sobre Kerala, India pusieron de relieve el modo en que el proceso de descentralización había sido una experiencia exitosa de la transición democrática desde abajo. Asimismo, en Canadá, lo que comenzó como un movimiento provincial para desafiar las asignaciones presupuestarias, ha alcanzado progresivamente un nivel nacional, ya que el presupuesto federal alternativo se determina mediante un proceso participativo de los ciudadanos en todo el país. Esto podría servir de modelo sobre cómo lograr que la políti-

ca económica sea más democrática. También se describió un enfoque participativo sobre la formulación de políticas en algunos países del Sur de África, si bien una serie de limitaciones—incluyendo la capacidad limitada del gobierno y las estructuras institucionales mal adaptadas—han impedido que se hayan alcanzado todos los objetivos. Por último, se señaló que, al analizar las experiencias de las economías en transición, debía aprenderse que la rapidez de las reformas reviste menos importancia que la solidez de las instituciones. En efecto, en muchos de estos países, la reforma democrática, cuando el Estado de derecho es débil, puede tener consecuencias negativas tanto en la capacidad de las instituciones como en el crecimiento económico.

El último tema abordado durante la conferencia giró en torno a las estrategias y actividades futuras. Gran parte de esta discusión se basó en un acuerdo general sobre la falta de visibilidad que caracteriza la investigación sobre el desarrollo en los países en desarrollo, y sobre la necesidad apremiante de producir una nueva generación de economistas del desarrollo que combinen su competencia profesional con perspectivas críticas. Un resultado concreto de la conferencia fue el establecimiento, por parte de algunos participantes, de la organización International Development Economics Associates (IDEAs), asociación internacional de investigación, independiente de UNRISD, que tendrá por objeto crear una red pluralista de economistas heterodoxos comprometidos con la enseñanza, la investigación y el análisis crítico del desarrollo económico. Para obtener más información sobre esta iniciativa, puede consultarse el sitio Web www.networkideas.org.

Se publicará un informe completo de la conferencia en el próximo número de **UNRISD Conference News**.

La responsabilidad social y ambiental de las empresas en Perú

4-5 de septiembre de 2001, Lima, Perú

Este seminario congregó a más de 30 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) establecidas en Perú, empresas del sector privado, instituciones académicas y organizaciones internacionales. Las discusiones mantenidas durante esta reunión de dos días, organizada con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sirvieron para enriquecer los resultados preliminares de la investigación realizada por UNRISD sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas (RSAE) en Perú.

Peter Utting, Coordinador de Investigación de UNRISD, inauguró la reunión con una evaluación de las fortalezas y debilidades de la política internacional actual de la RSAE. Su presentación fue seguida de una discusión sobre la efectividad de diferentes tipos de enfoques voluntarios y reguladores en los contextos de los países en desarrollo. Los participantes subrayaron que, en tales contextos, las empresas tanto estatales como nacionales a menudo carecen de la voluntad política y los recursos necesarios para mejorar las normas sociales y ambientales, y las organizaciones y redes de la sociedad civil pueden no ser suficientemente firmes o tener otras preocupaciones más apremiantes.

El seminario continuó con una presentación de Renato Alva Pino, Asistente de Investigación de UNRISD, que destacó los resultados preliminares obtenidos por UNRISD sobre la RSAE en Perú. Varias empresas multinacionales, en particular en el sector de la minería, han adoptado el discurso de la responsabilidad empresarial en los últimos años, y una serie de empresas nacionales y asociaciones comerciales están promoviendo igualmente. Este concepto comenzó a despertar interés a principios del decenio de 1990, en un contexto de crisis económica, social y política, cuando

algunos líderes de empresas nacionales se esforzaron por desempeñar un papel más importante en el desarrollo nacional, haciendo frente a cuestiones no sólo económicas, sino también sociales y políticas. Sin embargo, las medidas voluntarias que se han adoptado generalmente se limitan a unas pocas iniciativas asociadas con la educación, la atención a la salud, proyectos de desarrollo comunitario y ayuda humanitaria. Algunas de las empresas que adoptan las iniciativas de la RSAE están respondiendo fundamentalmente a la presión externa—como las inquietudes expresadas por consumidores y activistas de países del Norte. Alva Pino concluyó afirmando que la política de la RSAE en Perú no concede necesariamente prioridad a cuestiones y preocupaciones nacionales como la corrupción y la discriminación. Sin embargo, con relación a la responsabilidad ambiental, la regulación gubernamental ha desempeñado un papel importante.

Existe una brecha considerable entre la teoría y la práctica de la RSAE. La difícil situación económica en que se halla la mayoría de las industrias nacionales y la falta de presión concertada por parte de la sociedad civil son dos restricciones claves para el progreso en relación con la RSAE. Algunos participantes señalaron importantes impedimentos de índole estructural y cultural con relación a la RSAE, por ejemplo, en cuanto a las características específicas del capitalismo nacional en Perú y a las relaciones sociales en el lugar de trabajo. También pusieron énfasis en el modo en que las políticas económicas neoliberales y el sistema político autocrático establecido durante el decenio de 1990 habían creado un marco desfavorable para la RSAE.

En el segundo día del seminario, dos empresas destacadas expusieron sus estrategias para promover la RSAE.

Barrick, una gran empresa multinacional de minería, presentó su programa social para las comunidades de las zonas mineras. Si bien la empresa había adoptado una gran diversidad de iniciativas, el gran potencial de las mismas se veía limitado por la extensión de la pobreza, la falta de apoyo estatal y de servicios en las zonas mineras, y los problemas generados por la desconianza de las comunidades. La segunda empresa, Corporation Backus, una compañía peruana, describió las iniciativas que había adoptado en los ámbitos de la educación, la cultura, el arte y la atención a la salud. En las discusiones que tuvieron lugar a continuación, los participantes del seminario expresaron su inquietud por la falta de indicadores de responsabilidad social y ambiental en estos programas, por la sustentabilidad de los proyectos de la RSAE y por sus relaciones con partes interesadas, como organizaciones de trabajadores y consumidores.

En la última sesión, la asociación de empresas Perú 2021 presentó su proyecto Cadena, encaminado a adoptar sistemas de gestión ambiental a través de la ISO 14000. La ONG Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), presentó a continuación una serie de indicadores basados en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que se utilizan actualmente para evaluar la responsabilidad social de las empresas con respecto a sus trabajadores.

En conclusión, los participantes estaban de acuerdo en que hay una necesidad de integrar a las pequeñas y medianas empresas en la política de la RSAE, y de crear una cultura y un movimiento de responsabilidad empresarial más coherente con las características específicas de la situación en Perú.

Este taller fue financiado por la Fundación MacArthur.

La tecnología de la información y las comunicaciones en Senegal

16–17 de julio de 2001, Dakar, Senegal

Esta conferencia marcó la conclusión oficial de un año de investigaciones intensivas llevadas a cabo por un equipo de proyecto de UNRISD sobre el papel de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en la economía y sociedad senegalesas. Los intereses económicos, políticos y culturales de la TIC en Senegal—y sus consecuencias en el desarrollo social y la lucha contra la exclusión social en el país—fueron preocupaciones generales que determinaron los diez estudios del proyecto.

La conferencia se estructuró en torno a los tres temas siguientes: la TIC y el desarrollo económico; la integración de la nueva tecnología en los medios de comunicación y la educación; y la TIC, el desarrollo y la democratización. En sus observaciones iniciales, Abdoulaye Baldé, Secretario General del Gabinete Presidencial, puso de relieve el interés del gobierno senegalés, así como su apoyo al trabajo realizado por los investigadores, y confió en que éste prepararía el terreno para una utilización más equitativa de la tecnología a favor del desarrollo de los países africanos.

La TIC y el desarrollo económico

En la primera sesión de la conferencia se presentaron tres estudios. En dos de ellos se examinó el modo en que la tecnología de la información estaba incorporándose a las empresas formales del sector privado en Senegal. En uno de ellos se hizo referencia a las oportunidades y amenazas que suponía el Internet para las pequeñas y medianas empresas en Dakar, y cómo 79 de estas empresas estaban adaptándose a la nueva situación (por ejemplo, utilizando sitios Web y el correo electrónico, formulando nuevas estrategias de mercadotecnia, modificando políticas de personal, y estableciendo nuevas

formas de trabajo). En el otro estudio se plantearon cuestiones similares para 50 empresas industriales medianas y grandes representativas (incluidas empresas activas en el sector pesquero, en el procesamiento de alimentos, la industria textil y partes de máquinas), y se realizó un seguimiento de los cambios en la gestión, las relaciones con los proveedores y los clientes, y la elaboración de nuevos contratos internacionales. En dicho estudio también se evaluaron los supuestos costes y beneficios de la adaptación al nuevo entorno comercial.

En la tercera presentación se analizaron los resultados del estudio sobre las consecuencias de la tecnología de la información en el crecimiento y los modelos de desarrollo económico en Senegal. Ésta incluía un componente empírico que examinaba el modo en que esta tecnología estaba introduciéndose en varios sectores de la economía senegalesa, que ha experimentado una crisis y sufrido los efectos de varios programas de ajuste estructural. Se analizaron los cambios producidos en las relaciones sociales y económicas debidos a la incorporación de la TIC en las industrias y sectores de servicios existentes, al igual que los esfuerzos desplegados para impulsar la economía local a través de la ocupación de nuevos segmentos en el creciente mercado internacional de servicios basados en Internet. También se señalaron algunas de las principales dificultades a las que posiblemente se enfrente un país como Senegal cuando comience a beneficiarse y a participar en la “nueva división laboral internacional”.

La TIC en los medios de difusión y la educación

En dos de los cuatro estudios presentados en la segunda sesión de la con-

ferencia se expresó inquietud por la TIC y los medios de comunicación en Senegal. En uno de ellos se examinó el papel de los sistemas informáticos en la modernización del periodismo. El futuro del periodismo africano dependerá en gran medida de su capacidad de utilizar la tecnología de la información para responder a las necesidades locales. En este estudio se descubrió que el acceso de los periodistas a una parte de la tecnología—Internet en particular—y la utilización de la misma sigue siendo limitado, mientras que el uso de teléfonos celulares, por ejemplo, está muy extendido. Esto obedece fundamentalmente a las limitaciones económicas del sector. En el segundo estudio sobre los medios de comunicación se examinó la evolución experimentada por la radio, que—especialmente tras la creación de emisoras de FM en 1990—se ha convertido en una fuente esencial de información en las lenguas locales para la mayoría de los senegaleses. La relación de las preocupaciones locales y mundiales está complicándose cada vez más en este medio, ya que la radio y la televisión por satélite comienzan a ser nuevas fuentes de información y esparcimiento.

En los otros dos estudios abordados en esta sesión se examinaron la promoción y utilización de la TIC en el sistema educativo de Senegal, tanto en las escuelas secundarias como en las universidades. La introducción de ordenadores en las escuelas secundarias sigue siendo irregular y obedece casi exclusivamente de proyectos piloto que han recibido subvención externa. Los limitados recursos financieros y humanos han impedido la amplia utilización de ordenadores en todo el país. Sin embargo, el 80 por ciento de las personas encuestadas en el estudio consideraban indispensables la conectividad

y los ordenadores, ya que pueden ayudar a mitigar algunos tipos de problemas estructurales y organizativos que surgen en la enseñanza secundaria; también pueden facilitar el acceso a la documentación y fuentes de información que, en caso contrario, no estarían disponibles; y pueden contribuir a la adopción de la educación a distancia y de otras estrategias que potencian la iniciativa tanto del personal docente como de los alumnos.

Senegal se enfrenta a una serie de limitaciones en lo concerniente a la aplicación de la TIC en las universidades. Menos del 5 por ciento de la población está matriculada en instituciones de educación superior en el país. Si bien ya está saturada la capacidad de las universidades, la demanda sigue aumentando. Este problema podría solucionarse parcialmente si mejoraran la infraestructura, el equipo informático y la conectividad, ya que se ofrecerían oportunidades para la educación a distancia y la investigación. Sin embargo, siguen planteándose cuestiones importantes sobre las mejores formas de integrar la TIC y sobre el papel que ésta desempeña en la generación y transmisión de conocimientos. Además, las facultades universitarias no sólo deben seguir dominando un tema en particular, sino que ahora también deberán tomar medidas para estar actualizadas en el “entorno de la tecnología de la información”.

La TIC, el desarrollo y la democratización

Los participantes de la conferencia escucharon tres presentaciones durante esta sesión. La primera se basó en un estudio donde se analiza el cambio en la política oficial sobre la información y la libertad de expresión en Senegal. Se examinó la gradual relajación del control que el Estado ejerce sobre los medios de comunicación y las iniciativas recientes para mejorar la comunicación con los ciudadanos a través

de la creación de oficinas a nivel de vecindarios, donde cualquier persona puede tener acceso libremente a los registros públicos y obtener documentos oficiales. En la presentación también se hizo referencia al papel desempeñado por la TIC en las elecciones presidenciales de marzo de 2000, que transfirieron el poder a un partido de la oposición por primera vez desde la Independencia, en 1960. Las emisoras privadas de radio y los teléfonos celulares contribuyeron a garantizar la transparencia y precisión de los resultados electorales mostrando así, de manera concreta, el modo en que las fuerzas sociales habían utilizado la TIC para ejercer presión por un cambio democrático en Senegal.

En la segunda presentación de esta sesión se analizó el papel de la TIC en la transformación urbana de Senegal. El estudio se centró en el modo en que la tecnología de la información está siendo utilizada para reforzar los intereses religiosos y comerciales de la cofradía de los Murides en Tuba, la segunda ciudad más grande de Senegal, en donde el rápido crecimiento de esta hermandad se debe fundamentalmente a su papel ceremonial en las estructuras religiosas tradicionales de la sociedad Wolof. En el estudio se revela cómo los intereses de los Murides están siendo reforzados en los planos tanto local como mundial—a través del crecimiento del sector comercial informal multinacional, y de la creación de vínculos religiosos multinacionales. También se muestra cómo las nuevas oportunidades están cambiando las identidades y las relaciones sociales—entre hombres y mujeres, líderes espirituales y seguidores—en un entorno históricamente tradicional.

Por último, los participantes asistieron a una presentación del estudio realizado sobre el modo en que la TIC facilita las “relaciones a distancia” financieras y sociales, entre los migrantes senegaleses y su país de ori-

gen. El rápido crecimiento y la diversificación de los servicios de telefonía y las opciones de Internet están cambiando la forma en que los migrantes pueden participar en las decisiones cotidianas sobre cuestiones familiares y administrar empresas que dependen de sus inversiones. La TIC también está estimulando el establecimiento de nuevas empresas en los países donde los migrantes trabajan, en respuesta a las demandas de sus compatriotas en Senegal en lo que respecta a servicios de transferencia de dinero, comunicaciones internacionales baratas y nuevas formas de canjeo transnacional.

Se ha publicado (en francés) un informe completo de la conferencia en un número de **UNRISD Conférence Infos** (véase la página 21), que también puede consultarse en www.unrisd.org.

Algunos de los estudios discutidos en la conferencia están disponibles en www.unrisd.org. Los 10 estudios están publicados conjuntamente (en francés) en un volumen publicado por UNRISD y Les Editions Karthala. Estamos haciendo esfuerzos para traducir los estudios al inglés.

El estudio sobre Senegal realizado en el marco del proyecto sobre la Tecnología de la Información y el Desarrollo Social, incluida la presente conferencia, fue financiado por el Ministerio de los Países Bajos para la Cooperación para el Desarrollo.

Donald McGranahan

1917–2001

Don McGranahan, uno de los fundadores de UNRISD y director del Instituto de 1967 a 1977, falleció de cáncer a finales de 2001 en una clínica de reposo en Estados Unidos. Tras una prestación meritoria del servicio militar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cursó estudios de psicología experimental en Harvard. A continuación se incorporó a la que entonces era la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York, y adquirió renombre por su trabajo sobre las interrelaciones entre el desarrollo económico y social, descrito particularmente en el **Report on the World Social Situation** de 1961. Como secretario del Comité de Expertos de Mahalanobis sobre la evaluación de los niveles de vida, y en reuniones interagenciales llevadas a cabo en los años 50 y principios de los 60, estableció los cimientos para la labor de las Naciones Unidas con respecto a los indicadores sociales. En la publicación **International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide**, identificó indicadores que han permanecido prácticamente iguales hasta la fecha.

Sobre la base del estudio de los perfiles e indicadores del desarrollo, y con el objetivo de proseguir su labor, obtuvo una subvención del gobierno de los Países Bajos para fundar un instituto de investigación social en 1963 en el seno de las Naciones Unidas. Concluyó las formalidades organizativas para el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, escribió su mandato y se incorporó al mismo en calidad de director en 1967.

Sus primeros años como director generalmente se asocian con el atractivo inducido por la presencia de los Pre-

mios Nobel Jan Tinbergen y Gunnar Myrdal en el Consejo Ejecutivo del Instituto. También destacaban otras personalidades, incluyendo Eleanor Sheldon, el espíritu orientador de la vigilancia social en los Estados Unidos; Phillip Hauser, el ilustre demógrafo; y, por poco tiempo, Jacques Delors antes de que volviera a la política europea. Menos valorada es la dura labor desplegada para amoldar estas influencias, pero heterogéneas personalidades en un instrumento efectivo para la dirección del Instituto. Es decir, conciliar los intereses econométricos de Tinbergen con el sentido práctico de Myrdal, por ejemplo. El factor determinante en última instancia fue la personalidad de McGranahan—su devoción inquebrantable por los principios científicos y por la búsqueda de métodos prácticos al objeto de promover el desarrollo social, como medio para lograr desarrollo general. La mayoría de las divergencias desaparecieron en la búsqueda de conocimiento, y lo mismo sucedió con respecto a su gestión del personal del Instituto.

Los proyectos destacados durante el decenio en que ejerció como director, labor que desempeñó personalmente con la colaboración de su personal, incluyeron estudios sobre las consecuencias sociales de la Revolución Ecológica; el papel de las cooperativas en el desarrollo; el enfoque unificado sobre el desarrollo económico y social; e indicadores a nivel local (un proyecto propuesto por Myrdal para poner a prueba la pertinencia en las condiciones reales de empleo y otras estadísticas de uso común).

McGranahan tenía predilección por la evaluación del desarrollo y su aplicación al análisis social y económico, labor a la que tanto él como sus colegas

se dedicaron fundamentalmente fuera del horario habitual de trabajo. Examinaron críticamente los conceptos y datos tradicionales, rechazando aquellos que fueran claramente falsos (incluidas algunas estadísticas “manufacturadas” derivadas de modelos) y cuestionando la aplicación indiscriminada de técnicas estadísticas populares. El resultado de este estudio fue plasmado en la publicación **Measurement and Analysis of Socio-Economic Development** (volumen publicado mucho después de que McGranahan se jubilara), donde se presentaban perfiles de desarrollo—en lugar de indicadores agregados—basados en análisis de correspondencia y en un nuevo concepto de líneas perfectamente adaptadas, todas ellas innovaciones extraordinarias.

Como recuerdos personales cabe destacar su amabilidad; su negativa a aceptar más viáticos de los que utilizaba realmente para el alojamiento y la comida (el resto se ingresaba en el fondo común del Instituto para su utilización con fines sociales); sus partidos de squash con sus resignados colegas tres veces por semana antes de desayunar; y una vida familiar sosegada—si bien breve en ciertos momentos debido a la presión profesional. Don McGranahan deja tres hijos que, en sus carreras científicas, son dignos merecedores de su ilustre padre.

Wolf Scott, Investigador Principal de UNRISD de 1965 a 1986, ha escrito el presente texto en memoria de su amigo y colega.

UNRISD en el ciberespacio

El sitio Web de UNRISD (www.unrisd.org) ha sido seleccionado para su inclusión en la Social Science Information Gateway (SOSIG)—“autoridad principal de Internet reconocida sobre los temas que deben consultarse en materia de ciencias sociales”. SOSIG tiene como objetivo proporcionar una fuente confiable de información de gran calidad en Internet a investigadores y profesionales de las ciencias sociales, el sector empresarial, y la legislación. Forma parte de UK Resource Discovery Network. www.sosig.ac.uk

UNRISD en la traducción

La publicación de Solagral, **Courrier de la planète** (núms. 64 y 68) ha traducido al francés extractos de las publicaciones de UNRISD: **Business Responsibility for Sustainable Development** por Peter Utting (OPG 2) aparece como “Un intérêt bien compris”; “UN-business partnerships: Whose agenda counts?” por Peter Utting (UNRISD Informa, núm. 23) figura como “Les pièges du partenariat”; **Corporate Codes of Conduct: Self-Regulation in a Global Economy** por Rhys Jenkins (PP TBS 2) aparece como “Conduite à risque”; y **Toward Integrated and Sustainable Development?** por Solon L. Barracough (PP OC 1) se ha traducido como “À la mode de chez nous”. www.solagral.org

Los documentos de trabajo para la conferencia de UNRISD sobre Racismo y Política Pública han sido traducidos al portugués y publicados en Internet, en

Afirma Revista Negra Online, por la ONG brasileña Afirma Comunicação e Pesquisa. www.afirma.inf.br

UNRISD en los medios de difusión

En un artículo publicado en el diario **Le Monde** (11 de septiembre de 2001), se hizo referencia a la publicación de UNRISD **Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development** como señal de la reaparición de la disidencia económica en el sistema de las Naciones Unidas. “El título ‘Visible Hands’ apenas refleja la violencia del ataque contra la desregulación neoliberal contenida en el informe”, comentó la periodista Laurence Caramel. “Esta ofensiva de UNRISD indica la reaparición del discurso radical ignorado en las Naciones Unidas desde el decenio de 1970”, afirmó.

La Conferencia de UNRISD sobre racismo y política pública (Durban, septiembre de 2001) fue objeto de una amplia cobertura periodística en Sudáfrica y en medios de difusión internacionales. Se publicaron artículos inspirados en las contribuciones a la conferencia y los resultados de la misma en **African Development Forum**, allAfrica.com, **Business Day**, **Conference News Daily/The Earth Times**, **Daily Mail & Guardian**, **Fletcher Forum of World Affairs**, **Le Monde**, **Social Development Review**, y Xinhua News Agency. Guardian Unlimited, la edición en línea de **The Guardian**, también presentó un “enlace útil” con el sitio Web de la conferencia de UNRISD en su cobertura diaria en línea de la Conferencia Mundial contra el Racismo.

En los diarios de Dakar **Quotidien le Soleil** y **Sud Quotidien** se publicaron artículos tras la conferencia de UNRISD sobre tecnologías de la información y desarrollo social, celebrada en Senegal (julio de 2001). En un ámbito de investigación del Instituto se examinó la utilización de la tecnología de la información y las comunicaciones por parte de los medios de difusión en Senegal, estudio que fue objeto de amplia cobertura periodística.

India Abroad, un periódico semanal de la comunidad indioamericana publicada en Chicago, Dallas, Los Angeles, New York y Toronto, ha reimpresso “Hindutva as a savarna purana” y “Violence and survival”, el capítulo 4 de **Creating a Nationality: The Ramjanmabhumi Movement and Fear of the Self**, por Ashis Nandy, Shikha Trivedy, Shail Mayaram y Achyut Yagnik (UNRISD y Oxford University Press, 1995).

UNRISD en la capacitación

Cuatro de los documentos elaborados para el proyecto de conferencia de UNRISD sobre racismo y política pública están utilizándose en el curso “Teoría crítica de la raza”, impartido en Georgetown University durante el semestre de invierno de 2002. Los documentos son los siguientes: **Cataacts of Silence**, por Vijay Prashad; **The Social Construction of Race and Citizenship in the United States**, por George Fredrickson; **Immigration, Multiculturalism and the Nation-State in Western Europe**, por Jeroen Doomernik; y **Contested Realities: Race, Gender and Public Policy in Aotearoa/New Zealand**, por Tracey McIntosh.

El documento **Structural Racism and American Democracy: Historical and Theoretical Perspectives**, elaborado por Manning Marable para el proyecto de la conferencia de UNRISD sobre racismo y política pública, está utilizándose como material de curso en la Universidad del Sur de Florida.

Transition to What? Cambodia, UNTAC and the Peace Process, por Grant Curtis (DP 48); **The Social Impacts of Light Weapons Availability and Proliferation**, por Christopher Louise (DP 59); y “The terrible toll of post-conflict ‘rebel movements’ in Africa”, por el Director de UNRISD, Thandika Mkandawire (**Journal of Modern African Studies**, vol. 40, núm. 2, 2002) son las lecturas obligadas para el curso universitario avanzado o de posgrado de otoño 2002 llamado “Conflicto y desarrollo”, impartido en la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana, Washington, DC (Programa Internacional de Desarrollo).

Business Responsibility for Sustainable Development, por Peter Utting (OPG 2) fue utilizado por la fundación “Consumers International” como fuente de información clave para preparar un “conjunto de herramientas”, que fue distribuido para su utilización en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en 2001. Estas herramientas son una selección de iniciativas que pueden emprender los individuos, los grupos comunitarios y las organizaciones de consumidores en su labor para promover la rendición de cuentas empresarial a través de campañas de sensibilización, recopilación de evidencia e investigación de pruebas, el lanzamiento de campañas con códigos, y la política de apoyo en colaboración con gobiernos y empresas.

Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development (2000) ha sido utilizado por una serie de

instituciones educativas desde su publicación. Entre ellas se encuentran el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia, la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York; y la Escuela de Planificación de la Universidad de Cincinnati, Ohio.

Difusión de la información de UNRISD

En 2001 y 2002, se difundieron más de 16,500 ejemplares de Documentos Especiales, Documentos del Programa y otras publicaciones de UNRISD en 40 eventos en todo el mundo—de Addis Ababa a Wellington, de Beijing a Guadalajara, y de Estambul a Nueva Delhi. UNRISD recaba información sobre conferencias importantes a través de búsquedas en Internet y de comunicaciones proporcionadas por los organizadores de los eventos.

Ámbitos de acción del personal de UNRISD

Yusuf Bangura

“Strategic policy failure and state fragmentation: Security, peacekeeping and democratization in Sierra Leone”, en R. Laremont (ed.), **The Causes of War and the Consequences of Peacekeeping in Africa**, Heinemann, Portsmouth, New Hampshire, 2002.

“Globalization and African development”, en R. Suttner (ed.), **Africa in the New Millennium**, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Suecia, 2001.

Krishna Chimire

“Changing rural power structures through land tenure reforms: The current dismal role of international organizations”, **Canadian Journal of Development**

Studies, vol. XXIII, núm. 2, 2002.

“Regional tourism and South-South economic cooperation”, **The Geographical Journal**, vol. 167, núm. 2, junio de 2001.

Huck-ju Kwon

“Welfare reforms and future challenges in the Republic of Korea: Beyond the developmental welfare states?”, **International Social Security Review**, vol. 55, núm. 4, 2002.

“Income transfers to the elderly in Korea and Taiwan”, **Journal of Social Policy**, vol. 30, núm. 1, 2001.

Thandika Mkandawire

“The terrible toll of post-conflict ‘rebel movements’ in Africa: Towards an explanation of the violence against the peasantry”, **Journal of Modern African Studies**, vol. 40, núm. 2, 2002.

“Thinking about developmental states in Africa”, **Cambridge Journal of Economics**, Special Issue on African Economic Development in a Comparative Perspective, vol. 23, núm. 3, mayo de 2001.

Shahra Razavi

“Mondalisation, emploi et droits des femmes”, **Cahiers Genre et Développement**, núm. 3, L’Harmattan, Paris y el Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo, Ginebra, 2002.

“Women in contemporary democratisation”, **International Journal of Politics, Culture and Society**, vol. 14, núm. 4, junio de 2001.

Peter Utting

“La responsabilité des entreprises dans la perspective d’un développement durable”, **Annuaire Suisse-Tiers Monde 2001**, núm. 20, Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo, Ginebra, 2001.

“Verantwortung der Unternehmen für die Nachhaltige Entwicklung”, **Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 2001**, núm. 20, Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo, Ginebra, 2001.

Reflexiones sobre racismo y política pública

continuación de la página 44

multicultural. Se tenía que sustituir este escurridizo “crisol” de diversas culturas por un aromático “potpourri” multicultural.

Los mecanismos polarizadores de la mundialización tienen implicaciones raciales, étnicas y culturales. Lejos de considerarse fenómenos aleatorios, la inclusión y la exclusión están vinculadas a procesos de construcción y de diferenciación étnica y racial generados históricamente. Los marginados a escala mundial, los que viven sumidos en una pobreza continua, los hambrientos y los enfermos—más de la mitad de la población, según las estimaciones de las Naciones Unidas—también son víctimas de la discriminación por motivos étnicos, raciales y culturales. ¿Acaso no es una forma de racismo el contraste de la pobreza que azota al Sur con la riqueza que predomina en el Norte? ¿Acaso no es una forma particularmente severa de discriminación la destrucción de ecosistemas y comunidades vibrantes y viables debida a las necesidades de la acumulación capitalista? ¿No es un ejemplo extremo de intolerancia y exclusión la creación de fortalezas de prosperidad rodeadas de mundos de miseria y desesperación? En efecto, el *racismo estructural* es el marco general en que se inscriben otras expresiones de discriminación racial y étnica.

Dado que las transiciones económicas y sociales entre grupos y comunidades claramente diferenciados siguen siendo “racializadas” en muchas sociedades, el concepto de la raza adquiere una gran importancia social y es preciso entender el racismo como parte del sistema de las relaciones de poder entre actores racializados, que no sólo incluyen a personas, sino también a las instituciones, al Estado y a la economía mundial.

No obstante, culpar al “sistema” en teoría no es una forma constructiva de hacer frente a los problemas, ya que esto conduce al viejo planteamiento, bastante inefectivo, de que “nada podemos hacer si no cambia el sistema”. Pero, ¿quién cambiará el sistema y cómo? Si bien las estrategias mundiales son necesarias, las políticas nacionales y locales siguen siendo esenciales.

Identidad e identificación, dignidad y diversidad, poder y política, derechos y recursos: éstas son algunas cuestiones controvertidas en la lucha contra la discriminación y el racismo en nuestro mundo globalizado posterior al colonialismo. Demostrar nuestra capacidad para hacer frente a estos problemas constituye uno de los principales desafíos de este nuevo siglo. Cada vez se habla más de *interculturalidad* en lugar de multiculturalismo propiamente dicho. Este término no negaría la diversidad cultural entre los grupos, sino que más bien la reforzaría a través de estructuras flexibles de gobierno no vinculadas culturalmente a un modelo particular de “Estado nación”. La cuestión de cómo se interpretará la idea de interculturalidad en los ámbitos de la educación, la comunicación, el control social, la creatividad cultural, la administración de la justicia, la representación política, entre otros, sigue abierta. Pero el debate ya ha comenzado.

Rodolfo Stavenhagen es Profesor de Sociología en El Colegio de México y el Relator Especial de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El documento completo del cual este artículo es un extracto se puede consultar en www.unrisd.org.

UNRISD es una agencia autónoma que se encarga de hacer investigación multidisciplinaria sobre las dimensiones sociales de los problemas contemporáneos que afectan al desarrollo. Su labor está dirigida por la convicción de que para formular políticas de desarrollo efectivas, es crucial comprender el contexto sociopolítico. El Instituto trata de proporcionar a los gobiernos, agencias de desarrollo, organizaciones de base y académicos, un mejor entendimiento sobre cómo las políticas de desarrollo y los procesos de cambio económico, social y del medio ambiente afectan a diferentes grupos sociales. Trabajando con una extensa red de colaboración de centros de investigación nacionales, UNRISD tiene como meta promover estudios originales y fortalecer la capacidad de investigación en los países en desarrollo.

UNRISD agradece a los principales países que patrocinan su presupuesto general—Dinamarca, Finlandia, México, Noruega, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza—el apoyo que aportan a sus actividades.

UNRISD
Palais des Nations
1211 Ginebra 10, Suiza
info@unrisd.org
www.unrisd.org

Editora: Jenifer Freedman
Asesor de este número: Yusuf Bangura
Traducción del inglés: Mónica Moreno
Correctora de pruebas de la versión
en español: Katrien De Moor
Formato por: Pamela Smardge

Las opiniones expresadas en los artículos, son exclusiva responsabilidad de sus autores. Su publicación en este boletín no refleja necesariamente la opinión de UNRISD.



Impreso en papel reciclado.

Reflexiones sobre racismo y política pública

Rodolfo Stavenhagen

En el umbral del siglo XX, W.E.B. du Bois—el preeminente intelectual del pueblo afroamericano—vaticinó que sería el siglo de la “línea de color”. En las décadas siguientes, el mundo fue testigo del surgimiento y la decadencia del nazismo y el holocausto, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el final del colonialismo y el apartheid, la aparición de los pueblos indígenas como actores políticos en el escenario internacional, el resurgimiento del racismo en Europa, y el espeluznante espectáculo de la limpieza étnica y el genocidio en Bosnia y Ruanda. Sin embargo, cien años más tarde, la “línea de color” aún sigue presente, separando a pueblos y culturas, y dividiendo a los poderosos de los oprimidos. Aunque esta línea forja fuertes vínculos entre comunidades étnicas, también ata a muchos otros en un “nudo conceptual”.

La visión sobre el racismo ha experimentado algunos cambios importantes desde la fundación de las Naciones Unidas. Durante la fase inicial, *el racismo se identificó fundamentalmente con el legado de la ideología nazi*. El racismo nazi se basó en una ideología pseudocientífica de pureza y superioridad racial, cuyo origen se remonta a numerosas corrientes de pensamiento occidental, y que se expresó a través de la antropología, la biología, la psicología y otras disciplinas. Hoy en día, el racismo científico ya no goza de ningún reconocimiento académico en absoluto. Los primeros esfuerzos de las Naciones Unidas en su lucha contra el racismo estuvieron relacionados con la eliminación del pernicioso legado del mundo de la posguerra, tal como se expresó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).

La siguiente fase fue producto de la *lucha librada contra el colonialismo*—y para acabar con el apartheid. En los decenios de 1950 y 1960, muchas antiguas colonias obtuvieron la independencia y la categoría de Estado, y de igual manera, en Estados Unidos surgió el movimiento por los derechos civiles. La Organización de las Naciones Unidas proclamó el derecho de autodeterminación en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960, incorporado ulteriormente a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General en 1966: “Todos los pueblos

tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (párrafo 2). Así, el énfasis cambió, de actitudes individuales e ideologías racistas estructuradas, a los derechos de las personas y el establecimiento de un nuevo orden internacional más equitativo. Sin embargo, la creciente importancia del Tercer Mundo fue el precedente de un nuevo escenario de desigualdades internacionales.

Durante los decenios de 1970 y 1980, el racismo volvió a manifestarse de un modo distinto, esta vez en los centros industriales del Norte, y afectando fundamentalmente a los *trabajadores migrantes* de las zonas periféricas, los *refugiados* y los *súbditos de las antiguas colonias*. Los incidentes provocados por la violencia racial aumentaron en los barrios urbanos de Europa Occidental; y la discriminación racial se dio a conocer en la educación, la vivienda, el empleo, los servicios de salud y el sistema de justicia penal. Los jóvenes pertenecientes a minorías raciales han sufrido en mayor grado las consecuencias, a través de un proceso de “criminalización”. En los Estados Unidos, por ejemplo, la población negra e hispana ha sido víctima destacada del racismo y la discriminación y, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los árabes se han convertido en los objetivos más recientes de tales prácticas.

Una serie de Estados comenzaron a entender el racismo, no como una serie de incidentes aislados, sino más bien como un *problema social estructurado y basado en modelos*. Si bien algunas personas apoyaron abiertamente la discriminación racial fenotípica, en el nuevo entorno mundial los conceptos de la raza y las relaciones raciales propiamente dichos estaban cambiando. Al multiplicarse las comunidades de inmigrantes en los países industriales, las diferencias biológicas percibidas armonizaron con las diferencias culturales reconocidas. En algunos países, el término “relaciones raciales” llegó a ser un código para las relaciones entre comunidades de distintas culturas. Los defensores de los derechos humanos ya no abogaban por la igualdad general (que para muchos parecía inalcanzable), sino por un nuevo concepto: *el derecho a ser diferente*. Se esperaba que los Estados llegaran a ser menos asimilacionistas y más pluralistas. No sólo no debía ponerse fin a las diferencias culturales, sino que éstas debían respetarse y celebrarse. Si bien la fusión parecía difícil de conseguir, estaba a punto de lograrse una sociedad

► página 43